

EUROPA Y AMÉRICA LATINA DE CARA A UNA ACCIÓN COLECTIVA MÁS AMBICIOSA SOBRE EL CLIMA

Hans JH Verolme con la colaboración de Enrique Murtua Konstantinidis y Paola Vasconi Reca



HEINRICH BÖLL STIFTUNG

Europa y América Latina de cara a una acción colectiva más ambiciosa sobre el clima

Hans JH Verolme con la colaboración de Enrique Maurtua Konstantinidis
y Paola Vasconi Reca

Logotipo

Reconocimientos

Los autores quieren agradecer a las muchas organizaciones y entrevistados del amplio espectro de la sociedad civil de Europa y América Latina que contribuyeron a este informe. Las opiniones expresadas, la responsabilidad por el análisis y la interpretación de las entrevistas son de los autores.

Coordinación y edición: Silvia Brugger y Patricia Jiménez


Traducción: Gustavo Alzugaray y Gustavo Hernández

Diseño e impresión: Micheline Gutman

Impreso en Bélgica, Diciembre de 2014

Fotos de portada:

Superior,  Emilia Tjernström [Arriving at the horizon]

Inferior,  by 350.org - Cough4Coal action, 2013



Este informe fue publicado por la Heinrich-Böll-Stiftung bajo licencia Creative Commons CC-BY-NC 3.0.

Este material puede ser **compartido** – copiado y redistribuido – por cualquier medio o formato y **adaptado** – remezclado, transformado o utilizado como base para construir a partir de él – de acuerdo a los términos siguientes:

Atribución – Debe otorgar el crédito correspondiente, incluir un vínculo a la licencia e indicar si se hicieron cambios. Debe hacer esto de forma razonable pero de ninguna manera que sugiera que quien otorga la licencia le autoriza a usted o al uso que haga.

No comercial – No puede utilizar el material con propósitos comerciales.

Sin restricciones adicionales – No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros la posibilidad de hacer cualquier cosa que la licencia permita. Para ver todos los términos de la licencia consulte: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

D/2014/11.850/6

Esta publicación puede ser solicitada a:

Heinrich-Böll-Stiftung – Unión Europea, Bruselas – 15 Rue d’Arlon – B-1050 Bruselas – Bélgica

T +32 2 743 41 00 F +32 2 743 41 09 E info@eu.boell.org W www.eu.boell.org

ÍNDICE

Introducción	4
El porqué de este informe	6
Cómo se arma el escenario	8
Las relaciones entre Europa y América Latina	12
El posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana hacia la Cumbre del Clima en París	16
La plataforma de Durban	19
Equidad	19
La brecha de emisiones	20
El financiamiento y otros medios de implementación	21
Adaptación, pérdida y daños	21
Bosques y REDD	21
Transferencia, tecnología y cooperación	22
Alternativas al desarrollo	22
Conclusiones	23
El posicionamiento de la sociedad civil europea hacia la Cumbre del Clima en París	25
La plataforma de Durban	28
Equidad	29
La brecha de emisiones	29
El financiamiento y otros medios de implementación	30
Adaptación, pérdida y daños	30
Bosques y REDD	30
Transferencia, tecnología y cooperación	31
Alternativas al desarrollo	31
Recomendaciones	32
Lista de abreviaturas	37
Biografía de los autores	38

INTRODUCCIÓN

La urgencia para abordar el desafío del cambio climático es más grande que nunca. El tiempo se está acabando. Luego del fracaso de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en Copenhague hace cinco años, la comunidad mundial trabajó para abrir otra ventana de oportunidad para un acuerdo internacional sobre cambio climático que debería concluir en París en 2015. Sin embargo, esta ventana es muy limitada y la tarea es gigantesca. A pesar de la frustración por el lento progreso del proceso multilateral, las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo intentan continuamente presionar para que los líderes se comprometan a llevar adelante acciones significativas sobre el cambio climático.

Para mantener el calentamiento global dentro de los límites de 2°C, el crecimiento de las emisiones debe llegar a un pico dentro de la próxima década. Las políticas orientadas al clima deben, por lo tanto, modificar urgentemente la actual tendencia y producir la descarbonización de nuestras economías. Una transición hacia una economía baja en carbono conlleva muchos beneficios, incluyendo una salud mejor y el fortalecimiento de la seguridad energética. Para garantizar el cambio de tendencia y abordar los impactos del cambio climático, se necesita una cantidad significativa de inversión, tanto para la mitigación como para la adaptación. Las espaldas más anchas deben soportar con su justa parte de la carga.

La nítida división entre países desarrollados y en desarrollo en la actual arquitectura de negociaciones sobre el clima no refleja las realidades geopolíticas y económicas de hoy. Solo se podrá lograr un acuerdo ambicioso y justo en materia de cambio climático si las alianzas que se crean van más allá de esta brecha.

La Unión Europea (UE) tiene un papel clave en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático y puede apuntalar el apoyo para un resultado ambicioso en París. Sin embargo, el

compromiso de la UE para una política ambiciosa sobre el clima está actualmente retrasado y su papel de liderazgo en peligro. Es el momento de revivir el liderazgo europeo en materia de cambio climático y de mostrar cómo la UE puede fortalecer y construir nuevas alianzas para un acuerdo mundial sobre el clima.

Con la realización de la Cumbre sobre Cambio Climático 2014 de Naciones Unidas en Lima, América Latina será el centro de la escena internacional sobre cambio climático. La región merece particular atención. Muchos países de América Latina trabajan por un acuerdo mundial ambicioso sobre cambio climático y tratan de llevar las negociaciones más allá de la división Norte-Sur. Al mismo tiempo, la diversidad de grupos de negociación dentro de la región podría ayudar a construir un entendimiento verdadero y mejor entre las diferentes posiciones sobre la base de valores e identidades comunes.

Con la tercera parte de los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la UE y América Latina tienen un poder de negociación considerable en el proceso multilateral de toma de decisiones, en base a sus históricos fuertes lazos culturales y económicos. Las dos regiones podrían fortalecer su intercambio birregional para formular objetivos conjuntos en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. El cambio climático también ha sido identificado como uno de los temas clave de las relaciones América Latina-UE.

La Heinrich-Böll-Stiftung, con su red mundial de 30 oficinas internacionales, apoya las acciones sobre el clima y la participación de la sociedad civil en el ámbito local, nacional, regional, birregional y mundial. Un variado espectro de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Europa como en América Latina, aboga por soluciones a la crisis del cambio climático y presenta vías alternativas de desarrollo.

La Heinrich-Böll-Stiftung, Unión Europea encargó a los expertos Hans JH Verolme, Enrique Mautua Konstantinidis y Paola Vasconi Reca analizar la posición de la sociedad civil europea y latinoamericana de cara a París. Sin desconocer las diferencias en el contexto intra e interregional, el informe intenta explorar el potencial de las demandas y propuestas conjuntas de la sociedad civil europea y latinoamericana para llegar a un acuerdo sobre el clima equitativo y más ambicioso en París.

La asociación entre la UE y América Latina podría intensificarse tomando en cuenta esos “denominadores comunes” de la sociedad civil

en el ámbito birregional. Una alianza entre la UE y América Latina podría servir para desarrollar nuevas narrativas, que trasciendan la división Norte-Sur, a los efectos de lograr un acuerdo sobre cambio climático mundial ambicioso, vinculante, justo y equitativo en París, en 2015.

*Silvia Brugger,
directora del Programa de Clima y Energía*

*Patricia Jiménez,
directora del Programa de Diálogo Mundial*

Heinrich-Böll-Stiftung, Unión Europea

EL PORQUÉ DE ESTE INFORME

“Todo el mundo vive como si sus sueños del futuro ya fueran realidad”

Ortega y Gasset

Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es el cambio climático. Si no fuera por la dedicación de cientos de miles de activistas sociales que hacen la diferencia en el terreno, éste no podría ser afrontado. Sin embargo, no es posible hacer frente a un desafío mundial tan complejo sin abordar el poder y la política. El optimismo con el que el escritor español Ortega y Gasset describió el estado de ánimo en Argentina a fines del siglo XIX bien pudo haber sido escrito para describir el optimismo de los muchos activistas del mundo. Ellos están creando con optimismo una vida mejor para ellos mismos, para sus familias y para sus comunidades. A ellos está dedicado este documento.

El año 2015 marca un momento importante para la gobernanza mundial. Están culminando las negociaciones de un acuerdo mundial sobre cambio climático, así como las negociaciones para un amplio marco de desarrollo post 2015. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales muestran una comprensible inquietud ante la perspectiva de un fracaso de las negociaciones, tal como ocurrió en Copenhague en 2009, y son conscientes de los riesgos de consolidar las bajas metas gubernamentales, tal como se hizo evidente en la Cumbre de Río de 2012.

Sin embargo, la sociedad civil no es un observador pasivo sino que ha probado repetidamente ser capaz de presionar a los gobiernos a ser más ambiciosos en la salvaguardia de los bienes comunes mundiales. De hecho se podría decir que, sin la participación activa de la sociedad civil, podrían haberse firmado e implementado pocos acuerdos internacionales sobre medioambiente y desarrollo. Sin embargo, el registro es variado,

y para que la sociedad civil sea más efectiva necesita incrementar su poder social, mediático y político. Esto comienza con una mejora de la transparencia y el rendimiento de cuentas democrático en sus propias filas, así como con una participación más enfocada en las negociaciones internacionales. Este foco debe ser impulsado por la demanda y la articulación concreta de alternativas creíbles a la visión de “más de lo mismo”.

Este corto informe ofrece una introducción a las perspectivas de la sociedad civil europea y latinoamericana sobre la política y las políticas internacionales relativas al cambio climático. Mediante la contribución al análisis fresco y la exploración del potencial para una colaboración más profunda entre Europa y América Latina, esperamos inspirar la colaboración a lo largo y ancho de las ONG y los movimientos sociales.

Creemos además que hay un espacio para una mayor colaboración de cara a una acción más ambiciosa con respecto al cambio climático entre las instituciones democráticas, más allá de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, aunque este informe fue escrito con la intención primaria de estimular las discusiones estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil europeas y latinoamericanas – en especial las ONG que trabajan en clima y desarrollo – nuestras recomendaciones se extienden a las instituciones europeas – en especial al Parlamento Europeo –, a los parlamentos regionales de América Latina, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los gobiernos de América Latina y de Europa.

Hasta el momento sólo hay un intercambio limitado entre las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones sobre los temas de cambio climático. El potencial para una colaboración más profunda es grande y el momento de explorarlo

es ahora. En un mundo que cambia rápidamente, los denominadores comunes entre Europa y América Latina parecen aún más significativos. Sin embargo, se necesita un mejor entendimiento de esos denominadores comunes. Aunque Europa y América Latina, con toda su diversidad, tienen fuertes lazos culturales y económicos, estos no pueden darse por sentado. Se necesita más trabajo para mejorar el entendimiento y construir confianza. Una mayor articulación y más debate sobre los aspectos comunes, así como sobre las diferencias, será un proceso entre socios que la Heinrich-Böll-Stiftung podría alentar. El debate y la mayor articulación de ideas concretas podrían

colocar a la sociedad civil en una posición más fuerte en relación con los gobiernos para demandar un acuerdo mundial ambicioso y equitativo sobre el clima a firmarse en París en diciembre de 2015.¹ En la etapa previa a París, tendrá lugar en Bruselas la Cumbre UE-CELAC. Juntos, los 28 miembros de la UE y los 33 países de América Latina y el Caribe representan casi un tercio de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Una alianza entre la UE y América Latina y el Caribe (ALC) tiene el potencial de acercar las negociaciones a un acuerdo mundial sobre el clima justo y ambicioso.

1 Véase por ejemplo Guy Edwards y J. Timmons Roberts (octubre de 2013): *The EU and Latin America and the Caribbean: Paving the Road towards a new Global Climate Change Agreement in 2015?*, EU-ALC Foundation.

CÓMO SE ARMA EL ESCENARIO

La UE tiene un papel importante y deberá revivir su liderazgo en el clima, construir confianza y formar coaliciones para lograr que la cumbre sobre cambio climático de 2015, a realizarse en París, sea un éxito. A pesar de sus limitaciones, el liderazgo de la UE desde 1990 ha sido clave para apuntalar las acciones en el clima mediante la formación de alianzas con otros países, lo que garantizó los resultados políticos en Kyoto, Copenhague y Durban. Sin embargo, la brecha entre la retórica y el liderazgo político internacional de la UE y la realidad europea en el terreno ha crecido. Incluso algunos altos funcionarios de la UE han admitido el hecho de que Europa ya no es un líder cuando se trata de lograr reducciones de las grandes emisiones en su propio territorio.

Europa y América Latina comparten importantes valores y luchan por un sistema internacional multilateral y basado en las normas. El cambio climático tiene un lugar destacado en la agenda de la asociación estratégica de la UE con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). La protección del clima tiene también un importante papel en la cooperación birregional, tal como el programa EUROCLIMA. Sin embargo, la retórica sobre la importancia de las acciones para el clima no se ha traducido hasta ahora en una acción más significativa en el terreno.

América Latina y Europa tienen un papel central en el proceso de negociaciones sobre el clima. La cumbre sobre el clima 2014, COP20, tendrá lugar en Lima y fue preparada en estrecha cooperación por la troika de presidencias de la COP – integrada por el organizador del año pasado, Polonia, Perú y Francia. En la etapa previa a París,

la Cumbre UE-CELAC 2015 se llevará a cabo en Bruselas. Ambas regiones tienen un compromiso establecido para lograr un acuerdo internacional sobre el clima para 2015 y el intercambio birregional más profundo puede ayudar a construir la confianza necesaria.

Para los países europeos más ambiciosos, la Asociación Independiente de Latinoamérica y de Caribe (AILAC) es el socio natural. La AILAC es un grupo diverso de países latinoamericanos con intereses geopolíticos y económicos divergentes que opera en las negociaciones sobre el clima de Naciones Unidas. Fue creado en Doha, Qatar, durante la COP18 por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, apoyado por República Dominicana, que rompió filas con el Grupo de los 77 y China sobre el tema de las contribuciones al esfuerzo de mitigación mundial de los países en desarrollo. En ese momento el periódico español El País llamó a la AILAC la “tercera vía” en las negociaciones sobre cambio climático.² Para quienes siguen el proceso podría no resultar sorprendente que la integración de la AILAC se superponga con la del Diálogo de Cartagena,³ un grupo más informal creado en 2010 que busca soluciones a los desafíos políticos en el contexto de las discusiones internacionales sobre el clima. El grupo está abierto a países que buscan construir un sistema ambicioso, amplio y legalmente vinculante, a través de posiciones constructivas, y a apoyar o promover economías bajas en carbono a mediano y largo plazo en el ámbito regional. Varios países europeos y latinoamericanos ya son parte del Diálogo de Cartagena de países progresistas.

2 Véase el periódico español El País (diciembre de 2012): La tercera vía latinoamericana en la negociación del clima, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/05/actualidad/1354699047_259945.html

3 La integración del Diálogo de Cartagena ha variado y crecido, de 27 países en 2010, a más de 40 e incluye a: *Alemania, Antigua y Barbuda*, Australia, Bangladesh, *Bélgica*, Burundi, **Chile**, **Colombia**, la Comisión Europea, **Costa Rica**, *Dinamarca, España*, Etiopía, *Francia*, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Indonesia, Kenya, Islas Marshall, Líbano, Malawi, Maldivas, **México**, Nueva Zelandia, Noruega, *Países Bajos*, Panamá, Perú, *Reino Unido*, **República Dominicana**, Rwanda, Samoa, *Suecia*, Suiza, Tanzania, Tailandia, Timor-Leste y **Uruguay**. (**En negrita = LAC**), (*en cursiva = UE*).

Ambas regiones son sumamente diversas y, hasta el presente, América Latina no tiene una posición única en las negociaciones internacionales sobre el clima. Por una parte, los países representados en la AILAC⁴ luchan por un enfoque alternativo a la tradicional división Norte/Sur, países desarrollados/en desarrollo, en las negociaciones sobre el clima. Para estos países, la meta principal de las negociaciones es garantizar que los países trabajen juntos, de manera positiva y proactiva en y con otros grupos regionales. La AILAC incluye miembros de la Comunidad Andina de Naciones y de América Central, todos grupos que deben ser involucrados si se intenta una alianza más amplia. Otros países latinoamericanos y caribeños toman parte en las negociaciones alineándose con posiciones opuestas, tal es el caso de los Like-Minded Developing Countries,⁵ la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y los países BASIC.⁶ Los países del Caribe tienden en general a alinearse con la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por su sigla en inglés).

Del mismo modo, se sabe que la UE tiene grandes dificultades para lograr el consenso necesario entre sus miembros durante las negociaciones sobre el clima (*véase el mapa de los grupos de negociación a continuación*).

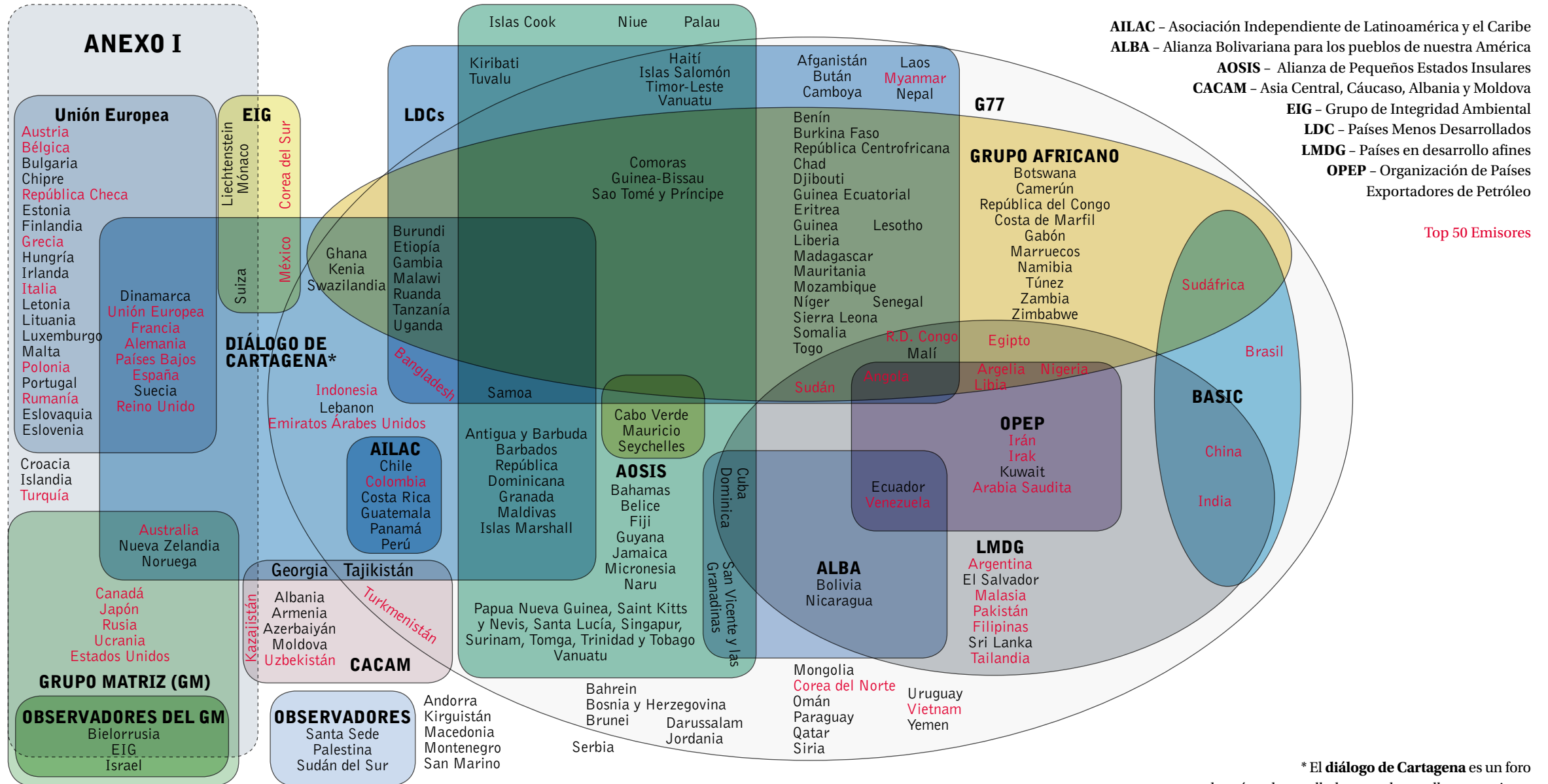
Existen también muchas diferencias y matices entre las posiciones de la sociedad civil de Europa y de América Latina de cara a las negociaciones sobre el clima de Naciones Unidas. El presente documento explora algunas de ellas. En una primera mirada, esta diversidad presenta un desafío para una alianza ambiciosa sobre cambio climático de la UE-ALC, pero estamos convencidos de que en la diversidad puede radicar una gran fuerza. A pesar del desafío, el periodo entre las cumbres de Lima y París debería usarse para alinear las fortalezas de la sociedad civil en los ámbitos local, nacional, regional, birregional y mundial. Y para formular demandas a las partes de la CMNUCC, a los efectos de forjar un acuerdo mundial sobre el clima ambicioso y justo en París 2015.

4 La AILAC es un grupo de países de América Latina y el Caribe que opera como grupo en determinados temas en las negociaciones internacionales sobre el clima. La alianza incluye a Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, y recibe el apoyo de República Dominicana.

5 El grupo Like-Minded tiene el objetivo de defender rígidamente los principios de la Convención y la diferenciación que existe entre los países del Anexo I y del Anexo II (desarrollado/más responsable, en desarrollo/menos responsable).

6 Argentina, Brasil y México (integrantes del G20) son países que actúan de manera independiente debido al tamaño de sus economías y al nivel de desarrollo. También debe notarse que los agrupamientos en Naciones Unidas no son mutuamente excluyentes: algunos integrantes de la AILAC son miembros de la AOSIS, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Coalición de Naciones de la Selva Tropical y el Foro de Países Vulnerables al Clima. La AILAC también ha hecho presentaciones conjuntas con México en la CMNUCC.

Grupos de negociación clave en las conversaciones de Naciones Unidas sobre el clima



AILAC – Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe
ALBA – Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América
AOSIS – Alianza de Pequeños Estados Insulares
CACAM – Asia Central, Cáucaso, Albania y Moldova
EIG – Grupo de Integridad Ambiental
LDC – Países Menos Desarrollados
LMDG – Países en desarrollo afines
OPEP – Organización de Países Exportadores de Petróleo

Top 50 Emisores

* El diálogo de Cartagena es un foro de países desarrollados y en desarrollo progresistas. Aunque no negocia como grupo, sus miembros abogan por posiciones compartidas en sus bloques formales.

Las relaciones entre Europa y América Latina



La relación UE-América Latina es la compleja suma total de relaciones birregionales, subregionales y bilaterales. También ha impulsado negociaciones y acuerdos de asociación que involucran el diálogo político, el comercio y la cooperación entre la UE, por un lado, y las organizaciones subregionales y los países individuales de América Latina, por el otro. Más recientemente, se agregó una dimensión parlamentaria y un componente de la sociedad civil al formato tradicional gobierno-gobierno. De manera significativa, desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2010, la región habla cada vez más con una sola voz. Junto con el crecimiento del poder económico hay también un aumento de la confianza.

El diálogo gobierno-gobierno entre la UE y América Latina, ha sufrido cambios sustanciales mientras desarrolla los fuertes lazos históricos y culturales. La Cumbre de Santiago de 2013, en particular, mostró un cambio de tono.⁷ Aunque estas cumbres fueron tradicionalmente consideradas de poca importancia por los líderes europeos, las cosas cambiaron y la UE debió bajar la cabeza. Las altas cifras de crecimiento económico de América Latina durante los pasados cinco años, en comparación con Europa, marcaron la pauta. El resultado fue una reunión descrita por la canciller alemana, Angela Merkel, como dinámica y de mente abierta. La UE tenía la esperanza de firmar finalmente un tratado de libre comercio con el Mercosur, pero poco se alcanzó. Aunque Brasil, con el apoyo de Chile y Colombia, era favorable al acuerdo, Argentina, el segundo integrante más grande del Mercosur, se opuso firmemente.⁸ A pesar de los titulares económicos, la UE está aún mirando muy de

cerca los cambios políticos y sociales, ya sea el estado de democracia participativa en algunos países de América Latina como la tendencia a una mayor inclusión social.

Históricamente, América Latina ha sido un beneficiario importante de la cooperación europea para el desarrollo. En la actualidad, los países latinoamericanos están sólidamente ubicados en el grupo de ingreso medio⁹ y 11 de ellos ya no son elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo (AOD). Chile (desde 2010) y México (1994) son miembros de la OCDE, generalmente conocido como el club de los 34 países industrializados más ricos del mundo. Además, Argentina, Brasil y México son miembros del grupo de las 20 economías principales del mundo, el G20.

Aparte de los desarrollos positivos, las relaciones UE-América Latina enfrentan importantes desafíos. Las pasadas décadas han sido testigos del foco de la UE en la integración de los miembros de Europa Central y Oriental, así como del surgimiento de las economías BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Como resultado de la actual crisis económica y financiera, observamos un desplazamiento de los ejes geopolíticos y económicos hacia la región Asia-Pacífico. El comercio de la UE con América Latina pudo haber continuado aumentando su valor, pero la UE ha perdido una porción del mercado de América Latina, pese a ser el inversor más importante. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, China sobrepasará a la Eurozona, como segundo socio comercial de América Latina, en 2016. China ya es el socio comercial más grande de Brasil, Chile y Perú.¹⁰

7 El Plan de Acción 2013-2014 de la UE-CELAC, con fecha 27 de enero de 2013, acordado en esta Cumbre incluye el Capítulo 2, "Desarrollo sostenible, medioambiente, cambio climático, energía".

Véase https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135043.pdf

8 Chile firmó un acuerdo de asociación con la UE en 2002. Colombia y Perú firmaron un acuerdo en 2012, luego de las negociaciones en el contexto de la comunidad andina. Todos ellos son miembros de la AILAC.

9 De acuerdo a la información del Banco Mundial, solo Haití es una economía de bajo ingreso con un INB inferior a USD 1.046. Los países en desarrollo de ingreso medio bajo de América Latina (con un INB per cápita entre USD 1.046 y USD 4.125) son: Bolivia, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Todos los demás son países de ingreso medio alto. Véase <http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups>.

10 Tal como informó South China Morning Post el 17 de marzo de 2014, "El comercio chino con América Latina superará al de la UE en dos años". Véase <http://www.scmp.com/business/economy/article/1450313/chinas-trade-latin-america-set-outpace-eu-within-two-years>

De acuerdo a la OECD, luego de una década de crecimiento relativamente fuerte, las perspectivas económicas de América Latina se están contrayendo debido a una caída del comercio, la reciente baja de los precios de las materias primas y el desmejoramiento de las condiciones monetarias y financieras, como consecuencia de la crisis del euro, un freno de la economía china y la incertidumbre acerca de la política monetaria de Estados Unidos. Aunque la exportación de materias primas ha permitido a América Latina sustituir los bienes fabricados localmente con importaciones, esto ha socavado sus capacidades productivas.¹¹

Existen profundas divisiones políticas e ideológicas e importantes asimetrías entre las contrapartes tradicionales de la UE y subregionales de América Latina, así como desacuerdos con la posición de la UE en algunos temas de acceso al mercado. Esto ha impedido hasta ahora la plena concreción de la prevista “red de acuerdos de asociación”, que era central para la estrategia de integración regional de la Unión Europea para América Latina. En Colombia, por ejemplo, los temas laborales y de derechos humanos han sido irritantes en la relación, en el contexto del Tratado de Libre Comercio UE-Colombia y Perú, así como los impactos medioambientales y sociales de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en Brasil.

La cooperación bilateral económica y política en los años recientes tiende a enfocarse en el acceso a los recursos y en la cooperación para la inversión. Alemania, por ejemplo, negoció un

acuerdo sobre materias primas con Chile, firmado por la canciller Merkel en el contexto de la Cumbre UE-CELAC de enero de 2013 en Santiago de Chile. La industria alemana, sin embargo, se queja de que finalmente el acuerdo no le otorga el acceso preferencial al mercado que esperaba.

Para poner todo esto en perspectiva económica, de acuerdo al Servicio europeo de acción exterior (SEAE), el comercio de bienes UE-AL se duplicó en la década pasada, de unos €100.000 millones a €200.000 millones (6,3% del comercio total de la UE y 13% del de AL). En 2010, la UE fue el mayor inversor extranjero en la región, con €385.000 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), o 43% del total de la IED de la región. La IED de la UE en América Latina y el Caribe fue más alta que la IED de la UE en China, India y Rusia combinada.

La UE ha entregado €2.700 millones en ayuda oficial al desarrollo (AOD) a través de la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF, por su sigla en inglés), un instrumento mixto para apoyar la inversión pública en sectores estratégicos. Los instrumentos mixtos mezclan ayuda al desarrollo con préstamos de las Instituciones Financieras Internacionales. Se han convertido en la nave insignia del innovador financiamiento para el sector privado. La LAIF ha sido criticada por las ONG como Aprovech, debido a que desvía fondos de la AOD, supuestamente destinados para el alivio de la pobreza, hacia el sector privado y para grandes inversiones en infraestructura.¹² En total, la

11 Véase el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (junio de 2014): acta resumida, http://www.oecd.org/site/lacforum/SummaryRecord_LACForum2014.pdf

12 Hernández y Sandell (marzo de 2013): Ayuda para un Desarrollo Verde: El diseño de la Facilidad de Inversión en América Latina de la Unión Europea, Aprovech. Véase http://www.aprovech.eu/files/Central_America/laif%20on%20the%20making_march_final.pdf. Véase también Tovar et al. (junio de 2013): Nuevas estrategias de cooperación al desarrollo de la Unión Europea: La facilidad de Inversión LAIF, <http://eurodad.org/files/pdf/5229de0400b27.pdf>; Sandell y Hernández (2012): Aid for the Latin America Investment Facility: Clarity on private sector and focus towards SMEs needed [Ayuda para la Facilidad de Inversión en América Latina: Claridad en el sector privado y el necesario enfoque en las PYMES], en: Reality of Aid 2012 Report, http://www.realityofaid.org/wp-content/uploads/2013/02/R0A_Report_2012-Aid_and_the_Private_Sector1.pdf

contribución financiera de la UE para programas regionales para el período 2007-2013 alcanza los €556 millones. Hoy en día, aparte de la LAIF, lo que permanece de la cooperación al desarrollo es un intercambio de buenas prácticas políticas, con apoyo a las políticas públicas nacionales y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Las prioridades para la cooperación regional UE-AL (y los programas respectivos) son:

- cohesión social ((EUROsociAL, Urb-AL, Al-Invest);
- desarrollo sostenible, incluyendo el cambio climático (EURO-SOLAR, EUROCLIMA, WATERCLIMA-LAC, RALCEA, FLEGT América del Sur);
- promoción de la educación superior y la investigación (ALFA, Erasmus Mundus).

El posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana hacia la Cumbre del Clima en París

Enrique Maurtua Konstantinidis y Paola Vasconi Reca



América Latina y el Caribe es una región que presenta una amplia diversidad geográfica, biológica, económica, política y sociocultural, que se refleja desde el Norte de México hasta el Sur de Argentina, y desde el océano Pacífico al Atlántico pasando por el mar Caribe. Ésta diversidad no es excepción en cuanto a posicionamientos e ideologías políticas se refiere y también se ve expresada en las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.

En la actualidad, podemos afirmar que América Latina y el Caribe vive una fuerte tendencia a la reprimarización de sus exportaciones y ocupa como proveedora de materias primas y recursos naturales el eslabón más débil en las cadenas productivas globales. La explotación de estos recursos, cada vez más intensiva, da como resultado la elevación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de la disponibilidad de los recursos naturales. La región se especializa en la extracción y exportación de combustibles fósiles como petróleo y gas natural, y viene desarrollando megaproyectos de producción de energía para hacer viables la explotación y exportación de minerales. El modelo agrícola predominante está basado en monocultivos de gran escala, directamente asociados a los altos índices de deforestación, y que hacen uso de inmensas cantidades de agua y tierra, además de utilizar fertilizantes y agroquímicos. Con sistemas de transporte basados en el modelo vial y la presencia de industrias con patrones tecnológicos responsables por elevadísimos niveles de emisión de carbono, queda claro que el modelo de desarrollo económico latinoamericano tiene mucho que avanzar para que se torne menos intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero.¹³

En este escenario, un rango muy amplio de contextos nacionales y subregionales determinan las prioridades y, por qué no, las ideologías propias de las organizaciones y movimientos a

la hora de definir posicionamientos frente a los temas que deben trabajarse por consenso en las negociaciones climáticas internacionales. Por otro lado, los focos de trabajo, el nivel de involucramiento y las propias capacidades en temas vinculados a las negociaciones climáticas varían notablemente; cabe destacar que son muy pocas las organizaciones latinoamericanas que hacen un seguimiento político-técnico y detallado de las negociaciones climáticas, o que incluso participan de las COPs, lo que hace difícil en muchos casos poder tener posiciones claramente referidas a los textos de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y más bien, sus posicionamientos se refieren más específicamente a los contextos nacionales, subregionales y regionales y, de manera general, al proceso de negociaciones. Dentro de la sociedad civil latinoamericana, además, existen organizaciones y movimientos que trabajan desde una mirada, más bien de oposición y resistencia, mientras que otras trabajan desde una manera más conciliadora en el diseño e implementación de políticas públicas.

El presente trabajo persigue rescatar elementos comunes de las posiciones de la sociedad civil, que para este trabajo considera a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y movimientos sociales de la región latinoamericana vinculados a las negociaciones internacionales de cambio climático (CMNUCC), con la finalidad de explorar el potencial de demandas y propuestas conjuntas de la sociedad civil europea y latinoamericana, a fin de forjar un ambicioso, vinculante, justo y equitativo acuerdo climático mundial en París 2015.

Para ello, el trabajo ha logrado recopilar, sistematizar y analizar los elementos y propuestas presentes en 30 posicionamientos de toda la región comprendidos entre el año 2012¹⁴ y el mes de septiembre 2014. Las posiciones recopiladas corresponden a organizaciones de nivel nacional

13 Ana Toni (julio-agosto 2014): De Varsovia a Lima. ¿Dónde estamos? ¿Qué vendrá? ¿Cómo puede contribuir América Latina?, en: Revista Nueva Sociedad N° 252, ISSN: 0251-3552, http://www.nuso.org/upload/articulos/4041_1.pdf

14 En Diciembre de 2011 se crea la plataforma de Durban, en la que los gobiernos se fijan como meta "iniciar nuevamente un proceso para elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión jurídica en el marco de la Convención que entrara en vigencia en el 2020". Consecuentemente se asume que las posiciones a partir de ese año contemplarían elementos relevantes para la negociación del mismo.

(9 países: Santa Lucía, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile), regional (posiciones de organizaciones regionales o consorcios de organizaciones¹⁵) y subregional (Centroamérica, Amazonia, Región Andina). Las mismas provienen de organizaciones de equidad de género, desarrollo, indígenas, y ambientalistas.

Se tomaron posiciones públicamente comunicadas y disponibles, procurando hacer una muestra representativa de la región latinoamericana, intentando recoger tanto su diversidad de visiones e ideologías como su distribución geográfica y prioridades. En segundo lugar, se trató de representar también las visiones de organizaciones que participan, o que están vinculadas a las “constituencias” observadoras de la propia CMNUCC, considerando para este trabajo a mujeres y género, organizaciones no gubernamentales ambientalistas (ENGOs), grupos indígenas y organizaciones no gubernamentales de jóvenes (YOUNGOS).

Este documento no es una posición en sí misma y sólo intenta ser un reflejo de los elementos en los que la sociedad civil latinoamericana centra su atención y en los que realiza sus demandas y propuestas en materia de cambio climático y el proceso de negociaciones internacionales.

Las posiciones de las organizaciones analizadas hacen referencia, en diferentes niveles de detalle, a los temas cubiertos en las actuales negociaciones del clima de Naciones Unidas. Cabe destacar que en muchos casos, las mismas se vinculan a demandas internas sobre la necesidad de políticas públicas para abordar el desafío del cambio climático de los propios países en los que se gestionó el posicionamiento, y que se infiere de allí las expectativas del grupo en las negociaciones.

La inferencia de los temas es relativamente simple. En primera instancia es temática (bosques, riesgos, reducción de emisiones, etc.); en segundo lugar se toma el reclamo que se hace (compromiso, medidas, programas) y finalmente se lo extrapola a la discusión internacional en donde calzan los mismos.

Para el análisis de las posiciones, tomando en cuenta los principales temas de discusión actual del proceso de negociaciones, se establecieron las siguientes categorías:

1. La plataforma de Durban
2. Equidad
3. La brecha de emisiones
4. El financiamiento y otros medios de implementación
5. Adaptación, pérdida y daños
6. Bosques y REDD
7. Transferencia, tecnología y cooperación
8. Alternativas al desarrollo

En términos generales, es posible señalar que las posiciones de la sociedad civil hacen referencia, de manera directa o indirecta, a cada una de las categorías, y que dentro de cada una de ellas hay diferentes temas más específicos que se detallan a continuación.

Un tema adicional al de las categorías de análisis es el de participación de la sociedad civil.¹⁶ Las organizaciones y movimientos siempre mencionan que los procesos de diseño de políticas, instrumentos, así como la toma de decisión, en cualquier nivel que sea, deben considerar las visiones de éstas. Con un amplio rango de demandas, las posiciones buscan y fomentan la participación activa como una manera de hacer el proceso climático inclusivo y transparente.

15 Construyendo Puentes; CAN-Latin America; Plataforma Climática Latinoamericana; Juventud Latinoamericana; AIDA; Fundación AVINA; Grupo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe (GFLAC); Declaración de Margarita; Foro de Mujeres Indígenas.

16 Este tema no queda incluido en la lista por ser de corte transversal a la categorización propuesta.

La plataforma de Durban

En relación a la Plataforma de Durban, o al nuevo acuerdo climático, las organizaciones latinoamericanas proponen siempre respetar los principios de la Convención, destacando:

- el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades (RCPDRC), que vela por una repartición justa de las responsabilidades y los compromisos al momento de tomar acción para contribuir a la solución del problema;

- el principio de precaución, que estipula que las políticas no deben atentar contra el medio ambiente pero al mismo tiempo no pueden atentar contra el "derecho al desarrollo";¹⁷

- el principio de que el que contamina paga, que pone la responsabilidad en aquellos que contaminan, contribuyendo con el problema.¹⁸

En muchos casos, se agrega que el nuevo acuerdo tiene que ser equitativo, además de justo y vinculante.

Las posiciones manifiestan, en general, un reconocimiento de la responsabilidad histórica como un indicador clave para la definición de compromisos de reducción de emisiones que deben asumir los países. La responsabilidad histórica es la cantidad de responsabilidad que acumula un país que contaminó en el tiempo. Consecuentemente, aquellos países que desde la revolución industrial lograron un bienestar social y económico superior a costa de contaminar sin

cesar, tienen una responsabilidad mayor en la reducción de emisiones que aquellos que apenas se han logrado desarrollar en los últimos años.

Pocas organizaciones¹⁹ mencionan un compromiso de reducción de emisiones fijo. Centro Humboldt y Construyendo Puentes, por ejemplo, mencionan la necesidad de reducir un 50% hacia 2020 y un 95% hacia 2050 respecto de 1990. Vale aclarar que, de todas las posiciones analizadas, la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (ANACC), la Mesa Nacional para Gestión del Riesgo (MNGR), y el Grupo Perú COP20²⁰ hacen referencia a las contribuciones nacionales y una adicional menciona que los compromisos del nuevo acuerdo deben incluir el tema adaptación.

Equidad

No son muchas las organizaciones latinoamericanas que hablan de equidad de manera directa, no obstante, algunas mencionan explícitamente que el nuevo acuerdo debe respetar los principios de Equidad y Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.

Las organizaciones de sociedad civil y especialmente los movimientos indígenas también han avanzado en colocar la necesidad de reconocer el impacto diferenciado del cambio climático con la finalidad de que el acuerdo global tenga como horizonte la igualdad de género y a la vez permita el impulso de políticas nacionales climáticas equitativas. El Grupo Perú COP20²¹ inclusive

17 Aunque algunas organizaciones se han plegado a lo que señalan unos Estados en su necesidad a "desarrollarse", el Principio Precautorio plantea tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sobre el tema sea incompleto o inconcluso. Al mismo tiempo propone un consumo sustentable, incluyendo cambios fundamentales del estilo de vida para orientarse hacia la calidad de vida y la suficiencia material en un mundo finito. Para una discusión detallada de este asunto véase E. Gudynas (2008): *Ética y desarrollo sostenible. América Latina frente al debate internacional*, México DF: Instituto Mora, 273-292.

18 Principio 16 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Brasil, 1992. Disponible en: <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>. En algunos casos se aclara que este principio no debe ser confundido con el pago por derecho a contaminar y que en su lugar debe ser compensación responsable por los daños resultantes del cambio climático.

19 Entre ellas están: Construyendo Puentes (espacio de articulación entre redes, plataformas y foros, en alianza con movimientos, campañas e instituciones para hacer frente al cambio climático), y organizaciones con sede en Centroamérica (Campaña Mesoamericana de Justicia Climática, ACTALIANZA, CLAI, Alianza Centroamericana por la Resiliencia).

20 Grupo Perú COP20 (2013): *Nuestra posición frente a la COP 20*, http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=225

21 Colectivo de organizaciones, gremios, ONG, sindicatos, grupos indígenas, mujeres, jóvenes, iglesias, medios de comunicación y otras instituciones de la sociedad civil de todo el Perú.

ha propuesto que las negociaciones en la COP20 asuman la resolución adoptada en la COP18 de Doha para alcanzar el equilibrio de género en las representaciones de las partes y en los procesos de toma de decisión.

El reclamo de un acuerdo equitativo es crucial para las organizaciones de la sociedad civil, puesto que hay un tema de soberanía de los pueblos y de los recursos que no debe ser ignorado. Cualquier acuerdo debe respetar de manera equitativa lo que cada país puede hacer considerando sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, y el derecho de los pueblos de asegurar el desarrollo sustentable de sus naciones que en muchos casos deben afrontar desafíos significativos en términos de reducción de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

La brecha de emisiones

Las negociaciones de la CMNUCC prevén reducciones de emisiones de largo plazo (después del año 2020) para el nuevo acuerdo, sin embargo, también contemplan acciones de mitigación de corto plazo que entren en funcionamiento antes del 2020. Esta vía de negociación es la que se conoce como la de la ambición pre 2020. Las organizaciones latinoamericanas no cubren de manera explícita este tema en posiciones analizadas, sin embargo hay un claro llamado de urgencia para la acción inmediata relacionada con las emisiones de los países que más emiten. La brecha de las gigatoneladas está mencionada explícitamente en dos posiciones,²² y demandan planes de acción para tratarlo: “Se debe continuar trabajando para la demanda de un plan de trabajo orientado a la reducción de la brecha de gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en términos globales, tal como lo ha establecido el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés)”²³.

En lo que a un futuro bajo en emisiones se refiere, el desarrollo de alternativas energéticas y planes de eficiencia en Latinoamérica se presenta como una gran oportunidad que puede por un lado, contribuir en la tarea de reducción de emisiones y, por el otro, asegurar el bienestar de las poblaciones. Ante esta situación, la sociedad civil, en especial aquellas que tienen sus bases en países de renta media, son claras en cuanto al modelo de desarrollo/modelo energético que desean para los países, o en muchos casos, el modelo de desarrollo/modelo energético y prácticas que no desean. Un factor recurrente en las posiciones, es el objetivo de tener más energías renovables no convencionales²⁴ en la matriz energética (primaria y secundaria) y el uso eficiente de la energía para disminuir su vulnerabilidad y avanzar hacia una mayor seguridad energética de los países. Asimismo, la demanda de una transición económica/energética justa hacia esos objetivos es un punto fuerte, teniendo en consideración que los actuales modelos de desarrollo hacen que las economías de muchos países dependen de los combustibles fósiles y que cambios abruptos en los sistemas podrían representar impactos en las economías nacionales, con repercusiones sociales.

En lo que se refiere a las soluciones no deseables, existe una clara oposición a las denominadas “falsas soluciones” al cambio climático. Aunque no son siempre las mismas, las falsas soluciones más prominentes de diferentes posiciones tienen que ver con los mercados de carbono como incentivos poco efectivos (o que requieren una profunda evaluación antes de ser reconsiderados), las grandes hidroeléctricas como energías limpias, y el uso de la geoingeniería como una solución al problema climático. Dentro de este grupo de soluciones también se identifica a la energía nuclear, sobre la cual la sociedad civil latinoamericana ha señalado que no representa

22 Construyendo Puentes (septiembre 2014): Posicionamiento: Construyendo Puentes, frente a la agenda global de cambio climático y desarrollo, <http://www.scribd.com/doc/244214104/CONSTRUYENDO-PUENTES-FRENTE-A-LA-AGENDA-GLOBAL-DE-CAMBIO-CLIMATICO-Y-DESARROLLO>; Declaración del V Encuentro regional (septiembre 2014): ¡Centroamérica vulnerable, Unida por la vida! ¡Por el Derecho a la sobrevivencia, demandamos un nuevo régimen para el clima legalmente vinculante! Managua, Nicaragua, <http://mngnrcaragua.org/?p=1256>

23 Declaración del V Encuentro regional (septiembre 2014), <http://mngnrcaragua.org/?p=1256>

24 Energías renovables no convencionales incluyen a: la eólica, la pequeña hidroeléctrica, la biomasa y el biogás, la geotermia, la solar y la mareomotriz.

una solución al cambio climático y que, además, conlleva asociados múltiples riesgos.

El financiamiento y otros medios de implementación

Frente al financiamiento y los medios de implementación, la posición de la sociedad civil en Latinoamérica es categórica: los países con mayor responsabilidad histórica y mayor desarrollo son los que deben contribuir con el apoyo financiero necesario para que los países en desarrollo puedan afrontar tanto las acciones de mitigación como la planificación de medidas adaptativas y el pago de los daños y pérdidas que se sufran a causa de los fenómenos extremos del cambio climático.

Sobre el fondo verde climático (FVC), las ONGs y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, piden con suma urgencia la capitalización del mismo para poder contribuir con la realización de los puntos mencionados anteriormente. En varias oportunidades se menciona la necesidad de contar con apoyo financiero de fuentes públicas, seguras, adicionales a la ayuda internacional, y en algún caso innovadoras, como por ejemplo la utilización del 1% del PIB mundial. También se hace mención a la necesidad de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de asegurar que los fondos se gasten para los fines propuestos.

Adaptación, pérdida y daños

La sociedad civil latinoamericana se caracteriza por hacer una fuerte mención a la condición de vulnerabilidad que tiene Latinoamérica frente al cambio climático, en particular la región Centroamericana. Esto asociado al acceso al apoyo derivado del FVC y del Fondo de Adaptación, puesto que actualmente los países prioritarios en las negociaciones son los países menos adelantados (PMA) y las islas (AOSIS).

Adicionalmente, la sociedad civil latinoamericana, especialmente las ONGs y movimientos

sociales de Centroamérica, destacan la importancia de lograr avances en la COP20 sobre la operatividad del Mecanismo de Varsovia sobre Daños y Pérdidas para que comience a funcionar de manera urgente.

Temas de adaptación basada en comunidades y adaptación basada en ecosistemas son levantados fundamentalmente por las organizaciones y movimientos indígenas.²⁵ Diferentes grupos reclaman la necesidad de priorizar zonas de ecosistemas que proveen sustento para sus comunidades, haciendo referencia a la adaptación de los ecosistemas que es necesaria para una amplia gama de beneficios, tales como la provisión de recursos de pequeñas comunidades, la protección del agua y la protección ante desastres. En cuanto a la adaptación basada en comunidades, las organizaciones indígenas hacen hincapié en la necesidad de hacerlo para asegurar la supervivencia de las pequeñas comunidades.

Bosques y REDD

Cuando se trata el tema bosques, la posición no logra salir con muchos denominadores comunes dado que, al igual que en las zonas más tropicales del continente, la diversidad de visiones muestran la complejidad del intercambio de posiciones para negociar.

Queda claro que las organizaciones en sus declaraciones manifiestan su interés e intención de preservar la Amazonia, la biodiversidad que ella aloja, y su contribución a la estabilidad del clima como sumidero de gases de efecto invernadero. Los grupos indígenas y andinos son aquellos que tienen mayor nivel de involucramiento, y en todos los casos se hace referencia al valor intrínseco que los bosques tienen, en especial con respecto a los servicios ecosistémicos que proveen, como por ejemplo, la protección de las nacientes de los ríos, y la seguridad hídrica.

Es importante aclarar que en las visiones sobre el mecanismo de REDD+, hay divisiones.

25 Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú (julio 2014): Propuestas frente al Cambio Climático; Foro Mujeres Indígenas frente al Cambio Climático (julio 2014): Recomendaciones para los Estados.

Hay quienes proponen una visión amplia de inclusión de diversos mecanismos para proteger los bosques y asegurar el rol de fijación de carbono relevante para las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo: Gestión Territorial Sostenible, REDD+, REDD+ Indígena Amazónico, Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra.²⁶ Y por otro lado, hay organizaciones que no apoyan los mecanismos de REDD+ de ninguna manera, por considerarlo una nueva forma de mecanismo de mercado que podría poner en riesgo el valor intrínseco de los bosques y convertirlos en activos meramente económicos.

Aquí en particular también se hace mención al rol de la mujer en las iniciativas de REDD+, y al valor del conocimiento ancestral que de ellas y de los pueblos originarios deviene, así como también temas de acceso al financiamiento de REDD+.

Transferencia, tecnología y cooperación

Las negociaciones climáticas consideran desde sus principios que los países más desarrollados deben apoyar a los que aún no se desarrollaron, con transferencia de fondos, tecnología y conocimiento. En tal sentido, hay muy pocas posiciones de la sociedad civil latinoamericana que hacen referencia a las discusiones propias de las negociaciones climáticas, sin embargo, es muy claro el mensaje que envían todas las organizaciones

respecto de la transferencia de tecnología y conocimiento: debe ser incondicional y los países más ricos tienen la responsabilidad de hacerla de manera gratuita y sin trabas por problemas asociados a la propiedad intelectual.

Alternativas al desarrollo

La diversidad de contextos y cosmovisiones se ve acrecentada en las organizaciones latinoamericanas cuando se consideran problemas de corte transversal, más holísticos, que subyacen en toda la discusión climática. Por eso, hay una serie de elementos que componen la visión y, consecuentemente, las posiciones de las organizaciones latinas. En general, es recurrente que las organizaciones demanden un modelo de vida que vaya en compas con el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, el respeto por la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra. Es por eso que en varias declaraciones se adopta el concepto originario de los indígenas sudamericanos del Buen Vivir, o Vivir Bien (*ver cuadro de diálogo más abajo*). Este concepto da una cosmovisión integral de las prácticas de producción y consumo de las sociedades, privilegiando la producción y consumo local, al tiempo que se descentraliza la producción y se hace más ambientalmente consciente para el bienestar de toda la población y la erradicación de la pobreza. Dentro de la CMNUCC se correspondería con Visión Compartida, y Esfuerzos Compartidos.

26 Este mecanismo es una propuesta del gobierno boliviano para trabajar la conservación de los bosques al tiempo que se trabajan los componentes de mitigación y adaptación de manera complementaria. Este mecanismo Bolivia lo presenta en la CMNUCC como alternativa a los proyectos de REDD+ y así evitar posibles participaciones de los sistemas de mercados (véase en línea http://www.bivica.org/upload/bosques-politica_bolivia.pdf).

El Buen Vivir como alternativa al desarrollo

El concepto de Buen Vivir, hoy en día, no es sólo una filosofía, herencia de los ancestros, sino que se ha traducido en un discurso político y una alternativa al modelo de desarrollo actual en crisis y su carácter antropocéntrico. Para los pueblos indígenas, el modelo occidental neoliberal, dónde el valor fundamental es el capital, es responsable

de la crisis actual; una crisis ambiental, financiera, alimentaria, energética, social o sea global, con injusticias entre pobres y ricos, discriminación, hambre, enfermedades y destrucción de la Madre Tierra. Pretenden restablecer otra concepción y modelo de vida, proponer otro modelo basado en los saberes ancestrales y adaptándolos a sus políticas y estrategias actuales.²⁷

Las posiciones existentes que tratan la “economía verde” (que no son muchas), y, en general, se expresan de manera crítica y negativa, señalan que este es un “capitalismo maquillado de verde” o un “ambientalismo de mercado”, por lo que se infiere que no habría un apoyo a la misma.

En varias oportunidades el concepto de justicia climática aparece como una demanda de las organizaciones y movimientos sociales en respuesta a la inacción de los países más responsables de generar el problema del cambio climático. Teniendo en cuenta los incumplimientos de muchos países miembros del protocolo de Kioto, muchas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana demandan un tribunal de justicia climática que sirva para aplicar penalizaciones al incumplimiento por parte de empresas y Estados.²⁸

La CMNUCC trabaja el tema agricultura como tal desde hace pocos años, no obstante, se han presentado varias iniciativas de prácticas amigables con el clima. Mientras que los países desarrollados negocian intensamente las prácticas agrícolas y su impacto en las emisiones, los

países en desarrollo apuestan a la necesidad de adaptar los cultivos para asegurar la producción de alimentos y la fuente de ingreso de muchos de los pequeños productores. En las posiciones recopiladas, las organizaciones y movimientos latinoamericanos no hacen referencia directa a este debate, pero está claro que lo más importante desde la perspectiva social es evitar la apertura de nuevas fronteras agrícolas y el desplazamiento de campesinos/as por parte de las empresas agroindustriales, y fortalecer la agricultura de pequeña escala para alcanzar la seguridad²⁹ y soberanía alimentaria.³⁰ Temas vinculados estrechamente al combate de la pobreza.

Conclusiones

La sociedad civil latinoamericana y del Caribe tiene un claro objetivo respecto de las necesidades de sus propias comunidades, países y sub-regiones. Y entre ellas existen demandas, que con diferentes matices, coinciden. Sin embargo es importante mencionar que la amplia diversidad de contextos dentro del mismo continente también dificulta abarcar en su totalidad y con-

27 D. Choquehuanca C. (2010): Hacia la reconstrucción del Vivir Bien. América Latina en Movimiento, ALAI, No 452: 6-13; E. Gudynas/A. Acosta (2011): El Buen Vivir más allá del desarrollo. Qué Hacer, DESCO, Febrero/ Marzo, Lima; F. Huanacuni Mamani (2010): Vivir Bien / Buen Vivir, Convenio Andrés Bello, Instituto Internacional de Investigación y CAOI, La Paz; Maïté Niel (2011): El concepto del Buen Vivir, Trabajo de Investigación – Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, Madrid.

28 De manera simbólica hay un grupo de organizaciones que crearon un Tribunal en el que se sanciona “moralmente” a responsables de los crímenes climáticos. Para más información, se puede acceder a los siguientes enlaces: <http://www.radiomundoreal.fm/Hay-responsables>; <http://marxmadera.org/tribunal-internacional-de-justicia-climatica>; <http://alainet.org/active/33660&lang=es>

29 La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. FAO (2011): Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria: <http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf>

30 La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos y de sus países a definir su política agraria y alimentaria. Via Campesina: <http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/314-que-es-la-soberania-alimentaria>

seguir denominadores comunes para todos los temas mencionados.

- Adaptación, y acceso al mecanismo internacionales de Daños y Pérdidas, son temas prioritarios por ser Latinoamérica una región no prioritaria dentro de las más vulnerables.

- Hay divergencias en la manera de posicionarse frente a los mecanismos relacionados al cuidado de los bosques, siendo REDD+ un tema difícil de abordar con una única posición.

- Las energías renovables no convencionales son un punto fuerte de coincidencia, y la transición hacia sociedades menos dependientes de los combustibles fósiles es ampliamente aceptada. Siempre anteponiendo la precaución de que el proceso debe ser justo y no poner en riesgo a los ecosistemas y las economías nacionales.

- El apoyo internacional (financiero, tecnológico y de capacidades) debe provenir sin condiciones desde los países más responsables y con mayores capacidades.

- Los sistemas basados en mercados traen muchas controversias al igual que las prácticas que no están ampliamente testeadas (p. ej. geoingeniería).

- El concepto del “Buen Vivir” es una manera de asegurar una visión holística de las medidas que el nuevo acuerdo global resuelva.

- La sociedad civil latinoamericana plantea que la toma de decisiones debe considerar la participación de la sociedad civil para asegurar la inclusión y la transparencia de las medidas que se adopten.

A pesar de la diversidad de posiciones que expresan las organizaciones y movimientos en Latinoamérica, es posible encontrar espacios de colaboración y el diálogo político, sobre todo en lo que se refiere a lograr en el 2015 un nuevo acuerdo global vinculante, ambicioso, equitativo y justo. Las organizaciones reconocen la responsabilidad histórica de los países industrializados en el fenómeno del cambio climático, y también es clara en general la demanda para que los países en desarrollo latinoamericanos no desarrollen los mismos patrones de producción y consumo para alcanzar el “desarrollo”. Aquí entonces se abre un espacio para que la sociedad civil apoye acciones y medidas que eviten el crecimiento de las emisiones en la región y que permitan la transición hacia sociedades y economías menos dependientes de los combustibles fósiles. En tal sentido, la promoción de las energías renovables no convencionales, destaca como el principal punto de encuentro entre gobiernos, parlamentos y sociedad civil.

También es claro que Latinoamérica necesita con urgencia iniciar acciones de adaptación, pues muchos de los impactos del cambio climático ya son un hecho en la región. Este, sin duda, es un punto que concita a los distintos actores a trabajar en conjunto. Sin embargo, la limitante de recursos y otras prioridades regionales (pobreza y desigualdad) ponen freno al avance de las medidas de adaptación. Empujar conjuntamente la capitalización del fondo verde del clima se presenta como un espacio para la articulación.

El posicionamiento de la sociedad civil europea hacia la Cumbre del Clima en París



Antes de ofrecer un análisis de las perspectivas de la sociedad civil europea acerca del proceso político sobre el clima rumbo a París, es bueno hacer notar que hay cientos de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales europeas que trabajan sobre el cambio climático y los temas de desarrollo y medioambiente relacionados. Solo la red Climate Action Network-Europa representa a más de 120 organizaciones de 25 países, varias de las cuales son a su vez redes de organizaciones nacionales y locales. Del mismo modo, el European Environment Bureau representa a más de 140 organizaciones con más de 15 millones de miembros en el ámbito de la UE. Varias de las redes mundiales de desarrollo y organizaciones medioambientales tienen sedes en Europa. Por nombrar unas pocas: ACT Alliance, Birdlife, CARE, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Oxfam y WWF.

Cuando se habla sobre la posiciones de la sociedad civil europea es importante destacar que, en comparación con muchas otras regiones, su capacidad para involucrarse en deliberaciones políticas detalladas con gobiernos es alta. Sin embargo, la sociedad civil europea en sí misma está internamente dividida, debido a que cada vez más activistas – por ejemplo de los movimientos anti globalización y de los granjeros – ha decidido dar un paso atrás en las actividades de presión a los gobiernos para enfocarse más en realizar campañas y acciones directas. Finalmente, las ONG europeas tienen la capacidad de compartir con colegas alrededor del mundo y mantener un diálogo para aprender e informarse acerca del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de otras regiones. Esto las ha enriquecido y se ve cada vez más reflejado en las posiciones que toman las ONG europeas.

A los ojos de la sociedad civil, Europa ha perdido su antigua posición líder en las acciones sobre el clima (*véase el cuadro a continuación*). Existe un amplio consenso en la sociedad civil europea de que es esencial un acuerdo mundial sobre el clima ambicioso y vinculante en París. Además, hay un grado de realismo acerca de cómo las negociaciones sobre el cambio climático podrían ser exitosas. Por esta razón, la sociedad civil se ha estado enfocando en las demandas de acción en sus países y apuntando más directamente a los

contaminantes de los combustibles fósiles. En contraste con la etapa previa a Copenhague, la sociedad civil europea no está estrictamente enfocada en el acuerdo internacional de seguridad, sino que está ahora demandando una respuesta triple a la crisis del clima:

1. Un desarrollo sostenible bajo en carbono, incluyendo una transición energética, así como patrones de producción y consumo sostenibles.

2. Garantizar la resiliencia climática, que posibilite la adaptación y el desarrollo de estrategias de reducción del riesgo de desastres.

3. Coherencia política en lo nacional y a lo largo de las organizaciones internacionales, incluyendo la oferta de medios de implementación para los países en desarrollo.

En la próxima sección se resumen las posiciones y perspectivas políticas de las organizaciones de la sociedad civil en el acuerdo de París. Como no todos los detalles de esas posiciones están ampliamente compartidas o disponibles públicamente, estos fueron obtenidos en parte mediante entrevistas a miembros de las organizaciones pertinentes. Pero antes de hacerlo, para entender las perspectivas y el enfoque del cabildeo de la sociedad civil europea sobre la política de cambio climático y un posible acuerdo internacional sobre cambio climático, debemos analizar el actual debate sobre la política europea de clima y energía – es decir, el llamado paquete 2030 de la UE. El paquete 2030 tiene cuatro pilares estrechamente ligados: el marco para el clima y la energía más allá de 2020; la seguridad energética de la UE; la compleción del mercado energético único; y la política energética exterior. Las deliberaciones políticas son casi por definición de corto plazo y se enfocan en los precios de la energía y la competitividad industrial, ya que son los objetivos primarios de los ministerios de economía y energía y de las fuertes presiones empresariales. Casi no se consideran los caminos hacia las profundas reducciones de las emisiones exigidas para mediados de siglo ni las significativas implicaciones mundiales de una pérdida de liderazgo de la UE en el área de la política de cambio climático.

Con respecto al segundo pilar, se debe garantizar la coherencia entre el marco clima/energía y

la estrategia de seguridad energética. Sin embargo, la coherencia es en realidad un tema subjetivo. El debate sobre la seguridad energética se ha convertido así en un choque entre los intereses nacionales de los estados miembros, dependiendo de sus respectivas matrices energéticas y del alcance de su dependencia de los combustibles fósiles (importados).

Además, en parte debido a las recientes tensiones entre la UE y Rusia, la seguridad energética se define estrictamente como la reducción de la inseguridad en la provisión de gas natural. Los gobiernos argumentan que esto exige un fortalecimiento del mercado interno, más conexiones de la red eléctrica y la capacidad de flujo inverso de los gasoductos hacia aquellos países altamente dependientes del gas ruso. Una reducción de la dependencia del gas natural de este tipo pocas veces es seriamente considerada.

Desgraciadamente, la política energética exterior de Europa, bajo el disfraz de la diversificación, se ha convertido principalmente en una política de construcción de infraestructura de gas y de exploración de combustibles fósiles en las regiones del Mar Mediterráneo y el Mar Caspio. Mientras que la mayoría de las ONG han enfocado sus actividades de cabildeo en el primer pilar (por ejemplo, el marco para el clima y la energía más allá de 2020), es importante entender que la Comisión, los ministros en el Consejo y el Parlamento Europeo los consideran como un paquete y que en la construcción de acuerdos se buscan concesiones entre los pilares. La reciente crisis en Ucrania debió haber reenfocado la voluntad política europea para reducir la vulnerabilidad a los shocks de la energía fósil, tal como las ONG como Oxfam ha pedido.³¹ En su lugar, los políticos están buscando importar combustibles fósiles de otras regiones.

La ambición climática europea

Hoy en día, la Unión Europea casi ha alcanzado su meta climática para 2020 que plantea una reducción de las emisiones del 20% con respecto a los niveles de 1990. Este cumplimiento adelantado fue posible en parte gracias a la crisis económica, que frenó el crecimiento de la economía europea desde 2009 en adelante, así como a un gran paquete de políticas y medidas en muchos de los sectores económicos. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha proyectado que las metas adicionales de 20% de energía renovable y 20% de mejora de la eficiencia energética estaría prácticamente también lograda. Sin embargo, seis países seguramente no lograrán sus objetivos 2020 mediante políticas y medidas nacionales. Además, preocupa que se hayan logrado pocos recortes – o ninguno – en las emisiones en los sectores del transporte y de la agricultura.³² El reclamo de Europa por el liderazgo inter-

nacional en el clima surge del objetivo del 20%, que es fuerte si se lo compara al de otras economías ricas. Para la comparación internacional, sin embargo, es importante recordar que la UE estaba lista, dispuesta y era capaz de aumentar su meta a 30% en Copenhague si los demás hacían su parte. Los otros países ni siquiera pidieron a la UE que subiera su meta, lo que desilusionó a los líderes de la UE. En segundo lugar, se debe entender que la meta de 2020 incluye las compensaciones. Para decirlo de forma sencilla, la meta podría lograrse utilizando bien más del 50% de las unidades internacionales de reducción de emisiones. Las ONG han argumentado repetidamente que muchas compensaciones internacionales no tienen un carácter adicional. Además, los subsidios otorgados del llamado “aire caliente” a las economías de Europa Oriental significan que las reducciones reales están muy por debajo del 20%.

31 Véase el comunicado de prensa de Oxfam en ocasión de la Cumbre del G7 de Bruselas, el 3 de junio de 2014, en <http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-06-03/g7-and-europe-face-energy-wake-call-food-and-fuel-crisis-looms>

32 Informe de la AEE No 6/2014 (octubre de 2014): Tracking progress towards Europe's climate and energy targets for 2020 [El seguimiento de los progresos de cara a los objetivos sobre clima y energía de Europa para 2020].

Para evaluar la futura meta climática europea es importante destacar que el objetivo 2030 de la UE es de al menos 40% de reducción de las emisiones en comparación con los niveles de 1990. Esto debe lograrse dentro de la UE. A pesar de la crítica de las ONG europeas por la falta de credibilidad y por estar lejos del 55% de reducción que pide la ciencia,³³ el carácter del objetivo sobre GEI es más fuerte que el de 2020. Las metas adicionales de aumento de la energía renovable hasta al menos 27% del consumo final de energía y una reducción mínima de 27% del consumo total de energía son muy débiles cuando se las compara con el enfoque de más de lo mismo y no son nacionalmente vinculantes. Además, aún resta decidir qué proporción es la justa y equitativa para cada estado miembro de la UE. Ya se ha acordado que la mitad de

las emisiones de la UE estaría cubierto por un Sistema de Comercio de Emisiones reformado. Se establecieron los objetivos de eliminar los intermediarios para 2015, lo que dificulta la comparación con, por ejemplo, el objetivo propuesto por Estados Unidos.

Desde una perspectiva internacional, es importante saber que hay un espacio limitado para la mejora del paquete para 2030 de la UE, ya que está sujeto a una revisión permanente por parte de los jefes de gobierno. En última instancia, la meta climática europea dependerá también de las metas de otros países. Si los líderes de otros países dijeran a los líderes europeos que pueden hacer más, eso podría hacer que Europa revisara, por ejemplo, sus metas sobre energía renovable y eficiencia energética.

La plataforma de Durban

La alianza sobre los objetivos de Durban, pese a las enormes diferencias de perspectivas, permitió que unieran sus manos el Grupo África, los Países Menos Desarrollados y la Alianza de Pequeños Estados Insulares con la UE, y habilitaran el lanzamiento de negociaciones de cara al acuerdo de París 2015. Claramente, las metas del acuerdo sobre el clima de París dependen de forma crucial de la visibilidad política del desafío del cambio climático. Es evidente que esa visibilidad ha caído de forma dramática desde 2009. El último informe del PICC no generó una ola de atención mediática, como hizo la entrega anterior. A pesar de la marcha de medio millón de personas en todo el mundo por la metas climáticas, en vísperas de la Cumbre Climática de Naciones Unidas de 2014, los líderes no asumieron los compromisos necesarios para una profunda reducción de las emisiones.

La mayoría de las ONG europeas comparten la visión de sus líderes de que el mundo ha cam-

biado mucho desde la creación de los anexos de los países desarrollados y en desarrollo de la convención sobre el clima de Naciones Unidas, y que mantener esta división no ayuda.

Un acuerdo de París debería incluir a todos los países aun si sus compromisos cambiaran. Sin embargo, las ONG son más positivas que sus gobiernos sobre la meta de mitigación de los países en desarrollo.

Desde el fracaso de Copenhague, muchos países y ONG descreen de cualquier presidencia de la COP. Como la COP21 se llevará adelante en Europa, todas las miradas están no solo en Francia sino también en la UE como grupo. Las ONG han expresado abiertamente sus preocupaciones por la recién incorporada Comisión Europea y su compromiso con la agenda de cambio climático. Con el ex primer ministro Tusk como presidente del Consejo de Europa, ¿crecerá el poder del grupo de países sobre política climática y energética de Visegrád?³⁴ ¿Será suficientemente fuerte el impopular presidente francés Hollande como para

33 Véase por ejemplo la declaración de WWF en http://www.wwf.eu/media_centre/?231590/EU-fails-credibility-test-on-2030-climate-and-energy-ambition

34 El grupo Visegrád es una alianza entre Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa creada en 1991 para impulsar su integración europea, así como su cooperación militar, económica y energética. El grupo se ha resistido en forma reiterada a una política climática de la UE más ambiciosa, ya que exige un cambio fundamental en su sector energético dependiente del carbón.

abordar un acuerdo ambicioso? Son preguntas que, por ahora, no pueden contestarse.

La estructura básica de un Acuerdo de París debe apoyarse en la estructura del proceso ADP. El Área de Trabajo 1 será un acuerdo entre todos los países que cubran el período más allá de 2020. El Área de Trabajo 2 será un paquete de medidas que amplíen la meta anterior a 2020. Esto se explica mejor en la sección sobre la brecha de emisiones.

La forma legal del acuerdo post 2020 es un tema en el que pocas ONG están involucradas. Algunas de las grandes redes internacionales, incluyendo a sus equipos europeos, tienen puntos de vista sobre, por ejemplo, el carácter vinculante de los acuerdos en diferentes países, el marco para el registro de los planes y su conversión en compromisos legales, etc. Lo que sigue siendo una gran pregunta para Europa es si Estados Unidos actuará de forma decidida sobre el cambio climático y si un Congreso intransigente bloqueará la acción administrativa prevista. Segundo, ¿qué pondrá China sobre la mesa además de un objetivo deseado del pico de 2030? Más allá de la importancia del anuncio del G20, como se vio en Durban, hay un reconocimiento creciente de que importa mucho lo que otros países, más progresistas, pueden hacer y hagan. Esta no es una cuestión puramente política o diplomática y la sociedad civil tiene un importante papel ahí.

Equidad

El desafío del cambio climático es en esencia un desafío moral. La ecuanimidad, la justicia y la equidad intergeneracional son principios que la sociedad civil exige y que deben ser centrales en un acuerdo en 2015. Estos principios deben ponerse en práctica cuando se decida cómo se comparte el esfuerzo, las oportunidades y el riesgo. La equidad es un tema polémico en Europa, así como en las negociaciones internacionales. El objetivo 2030 de emisiones de GEI, acordado por los jefes de estado europeos en octubre de 2014, es vinculante para los gobiernos nacionales, pero aún no se ha acordado sobre la cuota justa de los estados miembros.

En el contexto de Naciones Unidas, el debate se centra en la implementación del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas (CBDR-RC, por su sigla en inglés) incluido en la CMNUCC. Más recientemente, Naciones Unidas reafirmó el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas tal como figura en el Artículo 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en su Documento Final del Evento Especial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Post 2015. Parece, sin embargo, que ningún gobierno quiere someter sus compromisos internacionales propuestos a una revisión independiente que evaluaría la idoneidad de la meta, el carácter comparable del esfuerzo y la equidad, tal como pidió la sociedad civil europea. Quizás como consecuencia de este fracaso moral, algunas ONG europeas como Greenpeace exploran opciones legales, incluyendo, por ejemplo, la responsabilidad climática internacional.

La brecha de emisiones

Las ONG europeas sostienen claramente que la acción climática no puede esperar hasta 2020, a través de la implementación de un acuerdo de París, asumiendo que se alcance uno. Desde Copenhague, las ONG han presionado en el contexto de la CMNUCC en el Área de Trabajo 2 del proceso ADP para cerrar la brecha de metas como consecuencia del fracaso de los gobiernos para lograr compromisos adecuados que limiten el calentamiento a menos de 2 grados Celsius. Es importante destacar que han lanzado una cantidad de campañas de acciones urgentes a corto plazo, por ejemplo, para alcanzar el 100% de uso de energías renovables y detener la deforestación.

En 2012, Las ONG europeas publicaron un análisis detallado³⁵ de cómo puede ayudar la UE a cerrar la brecha de emisiones y presionar para que la UE vaya más allá de sus metas declaradas para 2020. Sin embargo, las realidades políticas eran tales que estas propuestas de sentido común, que no necesitan legislación adicional, fueron ignoradas. Las reformas necesarias del Sistema de

35 CAN Europe (Noviembre de 2012): Closing the ambition gap – What Europe can do.

Comercio de Emisiones europeo fueron despedazadas debido a la presión de la industria sucia y la obstinación de estados miembros como Polonia.

El financiamiento y otros medios de implementación

El apoyo que necesitan los países en desarrollo para poder responder adecuadamente al reto climático son los medios necesarios para la implementación en las negociaciones de la CMNUCC. La sociedad civil europea exige que estos medios para la implementación deben ser parte de los compromisos que los países asuman en París.

La sociedad civil está demandando que se mantengan las promesas que hicieron los gobiernos europeos en el Acuerdo de Copenhagen – es decir, que para 2020 Europa entregue anualmente su justa parte de €24.300 millones de los USD 100.000 millones de financiamiento para el clima, y que ésta aumente considerablemente desde entonces. Esto incluye USD 5.000 millones de cara a la capitalización inicial del Fondo Verde para el Clima (FVC).³⁶

Muchas organizaciones, si no todas, creen que la mitad del financiamiento público del clima debe destinarse a la adaptación. Esto apunta a contrarrestar un sesgo entre los países donantes hacia la financiación de acciones de mitigación. Como una gran parte de la sociedad civil que trabaja en la política internacional sobre el cambio climático proviene de la comunidad del desarrollo, no debería sorprender que exija que el financiamiento público del clima sea adicional a la AOD convencional. De hecho, el financiamiento público del clima debe ser adicional al 0,7% del INB que los países donantes se comprometieron a entregar, y en lo que han fracasado rotundamente. La ayuda al desarrollo debe ser inteligente con respecto al clima y apoyar la oferta de acceso a la energía limpia.

Adaptación, pérdida y daños

Las organizaciones del desarrollo en particular argumentan que la adaptación debería

tener un papel importante en el acuerdo 2015 y que debería establecerse una meta mundial de adaptación, que apunte a la reducción del riesgo y a mejorar la resiliencia climática, en especial la de las personas pobres y marginadas. Esto está inextricablemente vinculado a la garantía de su seguridad alimentaria.

El Fondo de Adaptación de Naciones Unidas parece haber sido casi olvidado por la mayoría de las organizaciones, que solo hacen referencia al financiamiento del Fondo Verde para el Clima. Es cada vez más claro que la falta de una meta climática y la demora de las acciones de mitigación han aumentado el riesgo de consecuencias irreversibles.

Bosques y REDD

La degradación y la deforestación de los bosques, en especial de los bosques tropicales, son una considerable fuente de emisiones de gas de efecto invernadero. Bajo el estandarte de la REDD+, los negociadores del clima han acordado sobre las políticas para la Reducción de las Emisiones como consecuencia de la Deforestación y la Degradación de los Bosques. Europa es un gran donante para las políticas y los proyectos REDD, incluso en América Latina. Sin embargo, el foco particular de las actividades de la REDD en la reducción de las emisiones y la recuperación de los sumideros de carbono no es necesariamente compatible con la conservación de la biodiversidad ni con el desarrollo social de las comunidades tradicionales, que dependen de los bosques.

Mientras que muchas ONG europeas están de acuerdo en que debe establecerse una meta ambiciosa para la reducción de la deforestación, también hay preocupaciones acerca de la falta de respeto por los derechos humanos, la falta de salvaguardias sociales adecuadas para los proyectos y la inadecuada participación de las organizaciones de la sociedad civil.

36 Véase, por ejemplo, de carta del EEB del 20 de octubre de 2014 a los Ministros de Medio Ambiente (solo en inglés) en <http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=C3435A2B-5056-B741-DB005F7A20BF3C60&showMeta=0>

Transferencia, tecnología y cooperación

Además de los flujos financieros, es necesario construir capacidades y transferir tecnología a los países en desarrollo para que logren un desarrollo inteligente con relación al clima. Con la precipitada caída del costo de las tecnologías de energías renovables, los países en desarrollo se encuentran en una posición única. Pueden dar el salto para acceder a la energía limpia, evitando muchos de los costos y problemas asociados a los sistemas de redes de gran escala alimentados con recursos fósiles. Una parte de la transición energética puede financiarse con el FVC. De otra forma, las ONG están pidiendo una evaluación tecnológica, el desarrollo de la llamada lista verde de tecnologías realmente limpias y el involucramiento de las partes interesadas en la evaluación de los impactos medioambientales y socio-económicos de las nuevas tecnologías que pueden acarrear serios riesgos, como la geoingeniería.

Alternativas al desarrollo

Cambios importantes marcan las posiciones de la sociedad civil europea de cara a las acciones climáticas a largo plazo, en especial si se las compara con sus posiciones antes de Copenhague. Primero, hay un pedido claro por un 100% de energía renovable para 2050, así como un llamado a eliminar las emisiones. Esta es una narrativa totalmente diferente a la que pide una reducción de las emisiones de $x\%$ para el año y . Al mismo tiempo, los problemas fundamentales que abundan en el sistema europeo de comercio de emisiones ha llevado a que muchas organizaciones cambien su posición sobre el uso de mercados internacionales de carbono. La narrativa se complementa con una fuerte campaña contra los subsidios a la producción y consumo de combustible fósiles y el apoyo crediticio para plantas eléctricas alimentadas a carbón. Lo que observamos no son simplemente campañas más claras contra las fuentes de contaminación climática y los intereses particulares

que hay detrás, sino también un inspirador empuje por empleos más limpios, lo que devuelve el control de las energías renovables a la comunidad. Finalmente, una incipiente desinversión que pretende dejar 80% del carbono no combustible en el suelo, con el Ártico y el carbón como puntos álgidos, es el redondeo de lo que podría de hecho ser llamado un reajuste estratégico.³⁷

A pesar de los intentos de los grupos verdes de aprovechar la crisis económica para estimular la inversión en una economía limpia y eficiente en recursos, el debate en Europa por una economía verde está en riesgo de ser capturado por las grandes empresas y los gobiernos. De forma similar, el pedido de los expertos sociales y medioambientales a los responsables políticos para que miren más allá del PIB, y por un desarrollo que respete las fronteras planetarias no ha sido escuchado. De hecho, desde la cumbre Río+20 de 2012, observamos una aversión creciente al reverdecimiento de las acciones corporativas voluntarias. Hoy, algunas ONG cuestionan fundamentalmente el valor del “crecimiento verde”, otras continúan utilizando el concepto en sus políticas de presión.

Lejos de las capitales, existe un creciente y vibrante movimiento de la sociedad civil de base que construye una economía verde y compartida, de una “ciudad en transición” a otra. En muchas ciudades está surgiendo una economía compartida, se emiten monedas locales, se comercian servicios, los jardineros urbanos están reclamando bienes comunes perdidos, se vuelven normales las comunidades de código abierto. En medio de un alto desempleo juvenil, los activistas hablan del decrecimiento económico.³⁸ Las redes de movimientos sociales ya comparten muchas de sus experiencias a través de los continentes. Lo que es extraño son las asociaciones tripartitas formadas entre gobierno, sociedad civil y sector privado. El siguiente desafío es la necesidad de que, cuando estas iniciativas hayan crecido y sean estables, todos los interesados aprendan a replicarlas.

37 Verolme et al. (septiembre de 2013): What Future for International Climate Politics? – A Call for a Strategic Reset, Fundación Heinrich Boell, <http://www.boell.de/en/2013/09/05/what-future-international-climate-politics>

38 Para un análisis de las similitudes y diferencias entre las narrativas emergentes en Europa y América Latina, véase <http://eu.boell.org/en/2012/11/13/buen-vivir-and-green-new-deal-equivalent-concepts-eu-and-latin-america> and <http://eu.boell.org/en/2012/11/12/summary-differences-similarities-and-possible-articulations-between-buen-vivir-and-green>

Recomendaciones

Aunque las realidades europeas y latinoamericanas son muy diferentes, existe en toda esa diversidad, y entre las fuertes diferencias de opinión, un grado significativo de convergencia que se hace visible en las posiciones mantenidas por las organizaciones de la sociedad civil en ambas regiones. Hablando en general, se podría decir que las organizaciones europeas tienden a tener posiciones políticas articuladas con más detalle, aunque al mismo tiempo sus posiciones pueden carecer de contexto. Las voces más críticas son más fuertes en América Latina, lo que puede explicarse en parte por las diferentes historias políticas recientes, con la sociedad civil y los gobiernos a menudo en conflicto abierto. Lo que en América Latina sería visto como una cooptación política de las ONG por parte del gobierno, en el contexto europeo puede ser llamado presión legítima, sin renuncia de la independencia de las ONG. Sin embargo, debido a que con el actual proceso en relación al clima la sociedad civil comparte un objetivo claro de cara a París, vemos un potencial significativo para el diálogo, el desarrollo de estrategias y la colaboración birregional, lo que puede permitir una acción más efectiva de la sociedad civil de cara a París.

Como parte de una estrategia para ampliar la meta climática y fortalecer las llamadas alianzas progresistas, hay un amplio margen para la colaboración entre Europa y América Latina, tanto entre los gobiernos como a lo largo y ancho de la sociedad civil. Sin embargo, tal como este breve análisis ha mostrado, la sociedad civil es grande y diversa. Las personas tienen una meta común, frenar el peligroso cambio climático, y eso es una convergencia significativa. Pero no habría un acuerdo claro en relación a las teorías del cambio y a la mejor mezcla de políticas y medidas. Estas diferencias se notan entre los continentes. En particular en Europa y América Latina hay un debate no resuelto acerca del papel de los mecanismos de mercado, con una cantidad de organizaciones que rechazan estos mecanismos. Algunas van

más allá y cuestionan la creciente financiarización de los recursos naturales, tal como sucede en el contexto de las REDD, que marginan aún más a las comunidades pobres. Segundo, las organizaciones de la sociedad civil utilizan un amplio espectro de medios de acción y de expresión. En lugar de convertirse en una fuente de conflictos y socavar el objetivo común, se reconoce cada vez más que esta diversidad de medios crea una base más amplia para el movimiento por el clima. Hoy en día, hay una voluntad para dialogar y trabajar juntos a partir de un espectro más amplio de puntos de vista que en el pasado. Se ha reconocido que el enemigo no se encuentra dentro del movimiento por el clima. Éstas conversaciones deben incluir más voces de otras regiones.

Una vez dicho esto, todavía existirá un grado de desconfianza. Están aquellos que no desean involucrarse con los gobiernos, por no hablar de las empresas, en absoluto. Desean crear espacios alternativos y construir nuevas realidades y discursos, así como llevar adelante acciones directas contra los peores contaminadores. Este enfoque parece ser más común en América Latina que en Europa. Desde la década de 1970, la sociedad civil europea, con la excepción del movimiento anti globalización, se ha involucrado con los gobiernos para poner en práctica varias políticas y regulaciones. Estos han funcionado claramente para circunscribir los excesos de contaminación medioambiental. Con el tiempo, muchas ONG han dejado de ser grupos liderados por activistas para ser organizaciones de expertos, interlocutores confiables de los gobiernos y no críticas del sistema. En América Latina, hay una desconfianza mayor con el movimiento de expertos, grupos de trabajo y de presión por el clima más amplios, ya que muchas veces carecen de una base de miembros. Observamos que, como ha sido el caso en Europa, los gobiernos entrantes más progresistas se basan en la experiencia de la sociedad civil para engrosar sus filas. Sin tomar partido en un paisaje a menudo confuso, hay una necesidad general de fortalecer

la capacidad de las organizaciones para participar con su gobierno nacional sobre las cuestiones que abarcan las negociaciones internacionales sobre el clima. Esto le dará a las organizaciones una voz, cuando antes ni siquiera podían articular sus demandas en términos directamente pertinentes a los responsables políticos.

Este gran y diverso movimiento por el clima está creciendo, tal como se evidenció en las Marchas Populares por el Clima, en septiembre de 2014, y observamos que varias ONG están volviendo al punto de partida.³⁹ Hoy en día, luego de varias décadas de experiencia trabajando con y contra los gobiernos y las empresas, queda claro para muchos que el conocimiento experto y la presión no son una base suficiente para que el activismo de la sociedad civil pueda evitar el peligroso cambio climático. En particular las ONG europeas están hablando nuevamente de poder y política. A pesar de las grandes diferencias entre Europa y América Latina, esto es lo que conecta a algunas de las diferencias descritas antes. La construcción de una estrategia con un punto de vista de cara a París exigirá evaluaciones compartidas del poder, y el desarrollo de nuevas formas de influencia. Mucho ha cambiado en los años recientes y varias ONG no tienen disponibles las nuevas herramientas, aunque existan buenos estudios de caso.

Son muchas las implicaciones del fortalecimiento de una alianza internacional para los objetivos. Primero que nada, debe decirse que la construcción de confianza y el fortalecimiento de las capacidades están en el centro de cualquier estrategia. Esto exige la creación de espacios, muchos de los cuales surgirán y desaparecerán nuevamente, otros quizás continuarán siendo lugares de discusión y convergencia. En la etapa previa a la COP21 en París se necesitan muchos de estos espacios, algunos sobre temas concretos, otros enfocados en una agenda limitada en el tiempo, otros abiertos, sin el objetivo de obtener resultados concretos en un plazo de un año.

— Primero, hay un espacio significativo para una mayor colaboración entre las regiones en una economía post extractivista, incluyendo el movimiento para frenar la fracturación (*fracking*) y abandonar el carbón como la forma de combustible fósil más sucia. Visto desde una perspectiva política internacional, este trabajo de “dejarlo en el suelo” es fundamental para el objetivo mundial de limitar el calentamiento a menos de 1,5°C y llevar las emisiones a cero para 2050. Otros podrían enmarcarse en la lucha local contra la destrucción medioambiental y social.

— Segundo, otra área donde puede fortalecerse la alianza por los objetivos y que podría dar resultados tanto a corto plazo, así como ser la base para un cambio en el terreno a largo plazo, es el trabajo sobre las alternativas comunitarias al desarrollo intensivo en carbono. En el ámbito local, observamos muchas iniciativas de desarrollo alternativas que se benefician del intercambio y la colaboración. Estas se basan en un marco regulatorio claro, que incluye los derechos humanos y el respeto por las fronteras planetarias. En el ámbito internacional, podemos identificar muchas áreas: acceso a la energía limpia, seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible, patrones de consumo y de producción sostenibles, incluyendo flujos cercanos de materiales y mercados financieros de inversión para la resiliencia climática. Estas actividades pueden reunirse en “Alternatiba!”, el espacio para la sociedad civil en París.

— Tercero, hay espacio para una colaboración más profunda, incluyendo la posibilidad de encontrar puntos de presión en París, por salvaguardias fuertes en torno al financiamiento europeo de las actividades de la REDD en América Latina. Para algunos gobiernos las salvaguardias de la REDD son un tema sensible y tienen una posición muy firme acerca de la soberanía. Un enfoque en la soberanía puede obstaculizar el abordaje de los verdaderos problemas en el terreno. Al mismo tiempo, la sociedad civil permanece profundamente dividida en cuanto a la elección de los instrumentos para evitar la deforestación. Esto no puede afectar la continuidad del trabajo.

39 Artículo de opinión “El clima del pueblo”. Véase http://elpais.com/elpais/2014/09/29/planeta_futuro/1412008655_240653.html o, en inglés, <http://www.project-syndicate.org/commentary/monica-araya-and-hans-verolme-say-that-the-people-s-climate-march-was-just-the-start-of-popular-pressure-on-world-leaders>

Finalmente, más del lado gubernamental, la cumbre UE-CELAC 2015 está fijada para los días 10 y 11 de junio de 2015 en Bruselas, bajo el título “El diseño de nuestro futuro común hacia sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. Le corresponderá a la sociedad civil y a los parlamentarios europeos desarrollar propuestas más en profundidad para volver realidad los temas de la agenda de sociedades sostenibles. Como en 2013, se espera que el principal foco oficial de la Cumbre sea el comercio y los acuerdos de asociación. De hecho, esta Cumbre podría tener que abordar los efectos secundarios del acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), si se firma. Recomendamos aumentar la colaboración entre los parlamentarios del EUROLAT y los expertos y organizaciones de la sociedad civil. Como primer paso y en relación con el ca-

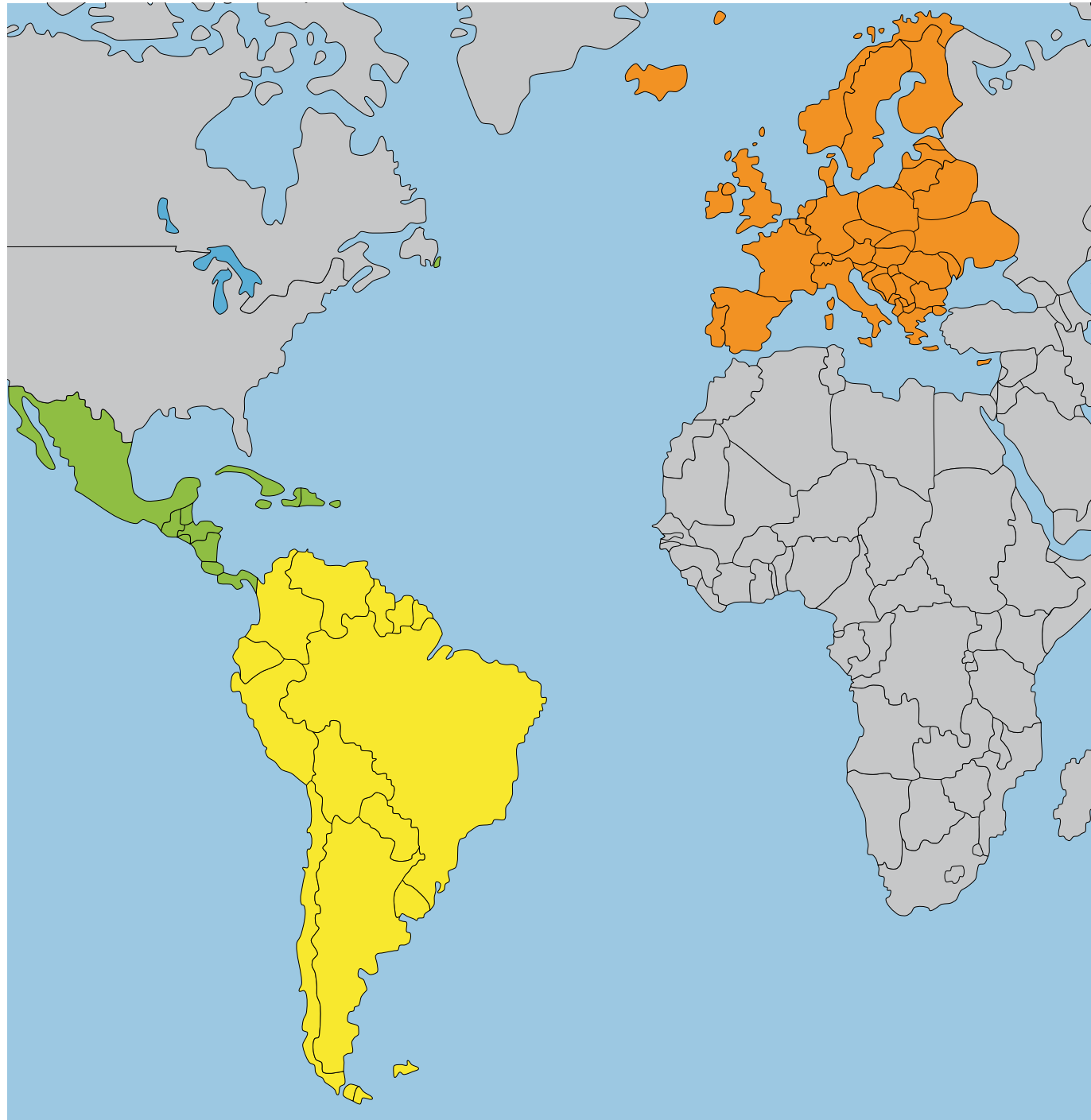
lendario actual, podrían preparar una resolución de urgencia a ser presentada a los jefes de estado en la Cumbre de la UE-CELAC.⁴⁰ Para hacerlo, la Secretaría del EUROLAT debe proponer a la delegación EUROLAT del Parlamento Europeo que nombre un relator europeo de política internacional sobre cambio climático y pedirle a la parte latinoamericana que haga lo mismo. Los co-relatores podrían desarrollar y elaborar el borrador de una moción conjunta de resolución con recomendaciones específicas para acciones de gobierno y colaboración birregionales de cara a un resultado más ambicioso en París.

En base a la historia y los valores compartidos, es mucho lo que Europa y América Latina pueden aprender una de la otra. Tenemos la esperanza de que este análisis inspire a las personas a avanzar por este camino.

40 Los documentos de EUROLAT pertinentes incluyen: Declaración (17 de mayo de 2011): Declaración de los copresidentes en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en Durban; Resolución (15 de mayo de 2010): Hacer frente conjuntamente a los retos del cambio climático: por una estrategia coordinada de la UE y América Latina y el Caribe en el marco de las negociaciones de la CMNUCC; Resolución (8 de abril de 2009): Comercio y cambio climático.

Datos clave por país: emisiones, ingreso y desarrollo humano

Países latino-americanos	Total de Emisiones GEI per cápita (incl. LULUCF) (tCO2e)	PIB-PPA Per cápita (Int\$ (2011))	IDH
Antigua y Barbuda	12.04	\$20,176.69	0.774
Argentina	10.55	n.a	0.808
Bahamas	7.59	\$22,630.11	0.789
Belice	45.18	\$8,223.42	0.732
Bolivia	14.71	\$5,278.89	0.667
Brasil	7.13	\$14,043.37	0.744
Chile	5.06	\$19,229.72	0.822
Colombia	4.66	\$10,801.15	0.711
Costa Rica	1.62	\$12,269.91	0.763
Cuba	4.01	\$18,290.92	0.815
Dominica	3.93	\$9,897.90	0.717
República Dominicana	3.14	\$10,411.79	0.700
Ecuador	9.04	\$9,019.32	0.711
El Salvador	2.27	\$7,236.96	0.662
Grenada	16.68	\$11,690.48	0.744
Guatemala	3.53	\$6,849.09	0.628
Guyana	9.45	\$5,542.06	0.638
Haití	0.80	\$1,490.86	0.471
Honduras	6.23	\$4,270.05	0.617
Jamaica	4.46	\$8,370.45	0.715
México	5.99	\$15,335.16	0.756
Nicaragua	8.00	\$3,946.34	0.614
Panamá	5.75	\$14,034.65	0.765
Paraguay	17.46	\$7,246.92	0.676
Perú	5.15	\$10,460.03	0.737
San Cristóbal y Nieves	6.83	\$19,579.18	0.750
Santa Lucía	6.28	\$10,263.42	0.714
San Vicente y las Granadinas	2.05	\$10,032.73	0.719
Surinam	17.51	\$14,126.96	0.705
Trinidad y Tobago	34.67	\$29,321.02	0.766
Uruguay	3.90	\$16,337.61	0.790
Venezuela	13.74	\$16,536.28	0.764



Unión Europea	Total de Emisiones GEI per cápita (incl. LULUCF) (tCO2e)	PIB-PPA Per cápita (Int\$ (2011))	IDH
Austria	10.70	\$41,787.20	0.881
Bélgica	11.85	\$39,693.76	0.881
Bulgaria	6.43	\$15,151.31	0.777
Chipre	3.58	\$19,840.14	0.812
República Checa	7.93	\$23,980.18	0.845
Estonia	11.88	\$26,618.90	0.861
Finlandia	10.85	\$41,558.32	0.900
Grecia	21.71	\$21,126.43	0.840
Hungría	15.54	\$37,754.53	0.879
Irlanda	7.51	\$35,713.83	0.884
Italia	10.11	\$39,668.48	0.911
Letonia	9.52	\$28,639.89	0.853
Lituania	7.06	\$21,997.69	0.818
Luxemburgo	13.19	\$42,187.69	0.899
Malta	7.66	\$33,842.74	0.872
Polonia	-1.07	\$18,621.80	0.810
Portugal	8.62	\$20,670.21	0.834
Rumanía	23.96	\$89,146.81	0.881
Eslovaquia	7.27	\$27,949.61	0.829
Eslovenia	13.25	\$42,944.20	0.915
Dinamarca	8.73	\$21,012.19	0.834
Unión Europea	7.01	\$26,116.37	0.822
Francia	5.81	\$16,644.43	0.785
Alemania	6.87	\$24,428.01	0.830
Países Bajos	2.69	\$28,018.36	0.874
España	7.18	\$31,828.61	0.869
Suecia	4.22	\$40,880.42	0.898
Reino Unido	9.23	\$34,696.20	0.892

LISTA DE ABREVIATURAS

ADP	Grupo de Trabajo <i>ad hoc</i> sobre la plataforma de Durban
AILAC	Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe
AL	América Latina
ALBA	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo (definida por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE)
AOSIS	Alianza de Pequeños Estados Insulares
ATCI	Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
BASIC	Bloque de cuatro países recién industrializados: Brasil, China, India y Sudáfrica
BRICS	Asociación de las cinco mayores economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CBDR-RC	Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y sus Capacidades Respectives
CELAC	Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP	Conferencia de las Partes
DLat	Delegación EUROLAT
EEAS	Servicio Europeo de Acción Exterior
EUROLAT	Asamblea Parlamentaria UE-América Latina
€	Euro
FVC	Fondo Verde para el Clima
GEI	Gases Efecto Invernadero
IED	Inversión Extranjera Directa
INB	Ingreso Nacional Bruto
LAC	América Latina y el Caribe
LAIF	Facilidad de Inversión en América Latina
LDC	Países Menos Desarrollados
Mercosur	Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ONG	Organización No gubernamental
PIB	Producto Interno Bruto
REDD	Reducción de las Emisiones como consecuencia de la Deforestación y la Degradación de los Bosques
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
UE	Unión Europea
USD	Dólar estadounidense

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

Hans JH Verolme



Trabaja como consultor principal experto en Climate Advisers Network. Hans Verolme es un distinguido experto en cambio climático mundial, energía limpia y desafíos de la política de desarrollo verde, con más de 20 años de trabajo en Europa, África, Asia y América. Tiene una vasta experiencia examinando la política sobre cambio climático, habiendo trabajado como consultor experto de la embajada británica en Washington, DC, y como director de WWF de Estados Unidos y mundial. Es miembro experto del Grupo de Coordinación Política de CAN Internacional. Climate Advisers Network es una red internacional de expertos en política sobre cambio climático que colaboran en proyectos estratégicos desafiantes. Además ofrecen insumos estratégicos a organizaciones no gubernamentales, empresas y gobiernos y apoyan sus liderazgos en la construcción de equipos fuertes. La experiencia de Verolme ha ayudado a muchos clientes a responder mejor a un mundo que cambia rápidamente. Puede ponerse en contacto con él a través de la siguiente dirección: climate@hansverolme.net

Enrique Maurtua Konstantinidis



Es el Asesor de Política Internacional de CAN Latin America (CANLA). Desde el año 2004 está activamente involucrado con las Organizaciones de la Sociedad Civil en las negociaciones de Cambio Climático. Como Coordinador Regional de CANLA coordinó los esfuerzos de incidencia de la sociedad civil latinoamericana por más de dos años. Siendo representante del departamen-

to de Cambio Climático de la Fundación Biosfera (Argentina) ha trabajado extensamente en proyectos de pequeña escala de energía renovable y educación ambiental. Como consultor Enrique ha escrito diversos artículos sobre cambio climático y negociaciones internacionales. Activamente imparte talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el Cambio Climático, la CMNUCC y las negociaciones internacionales en la región, incluyendo un curso virtual de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Paola Vasconi Reca



Es Ingeniera Geofísica del Instituto Politécnico Superior José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba. Cuenta con postítulos en Gestión y Ordenamiento Ambiental y en Ciencias y Tecnologías Avanzadas para la Protección Ambiental, de la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en temas de Medio Ambiente y Cambio Climático. Durante más de un década lideró el Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram, desde donde desarrolló una importante labor para abrir el debate en materia ambiental en Chile y promover nuevas políticas públicas en temáticas ambientales como la contaminación del aire, el cambio climático, la institucionalidad ambiental, energía, entre otros. Desde el 2012 se desempeña como consultora independiente en los ámbitos de cambio climático, medioambiente y políticas públicas. Ha publicado diversos estudios en materia ambiental (contaminación atmosférica, cambio climático, política e institucionalidad ambiental, residuos, etc.) y dictado talleres de capacitación para la ciudadanía en temas como el cambio climático, legislación e institucionalidad ambiental. También colabora como columnista con diversos medios de comunicación.

¿Logrará la comunidad internacional concluir un justo y ambicioso acuerdo climático en el 2015 en París?

A pesar de la frustración por el lento progreso del proceso multilateral, la sociedad civil de todo el mundo intenta continuamente presionar para que los líderes se comprometan a llevar adelante acciones significativas sobre el cambio climático. Solo se podrá lograr un acuerdo ambicioso y justo en materia de cambio climático si las alianzas que se crean van más allá de la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.

La Unión Europea tiene un papel clave en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, y puede fortalecer y construir nuevas alianzas para un resultado ambicioso en París. Con la realización de la Cumbre sobre Cambio Climático en 2014 en Lima, América Latina será el centro de la escena internacional sobre el clima. En base a la historia y los valores

compartidos, América Latina y la Unión Europea podrían fortalecer su intercambio birregional y desarrollar nuevas narrativas que trasciendan la división Norte-Sur.

Este informe ofrece una introducción a las perspectivas de la sociedad civil europea y latinoamericana sobre la política y las políticas internacionales relativas al cambio climático. Europa y América Latina pueden aprender mucho una de la otra y existe un margen considerable para una colaboración más profunda con miras a aumentar los objetivos sobre el clima. Al explorar el potencial de las demandas y propuestas conjuntas de la sociedad civil europea y latinoamericana, el presente informe demuestra cómo Europa y América Latina pueden aliarse para una acción colectiva más ambiciosa. Tenemos la esperanza de que este análisis inspire a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones democráticas para avanzar el potencial de una colaboración más profunda para hacer frente a la crisis climática global.

 **HEINRICH BÖLL STIFTUNG**
UNIÓN EUROPEA

Heinrich-Böll-Stiftung, Unión Europea, Bruselas – 15 Rue d’Arlon – B-1050 Bruselas – Bélgica
T +32 2 743 41 00 F 32 2 743 41 09 E info@eu.boell.org W www.eu.boell.org

